



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

///nos Aires, 9 de abril de 2024.

VISTOS estos autos caratulados: “Jim Automóviles S.A. y otros c/ U.I.F. Sumario 520/17 - Resol 3/21 118/22) s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 art. 25”, causa n° 5.726/2022; y,

CONSIDERANDO:

I.- Que, a modo de introductorio de las cuestiones debatidas, cabe señalar que llegan los autos a esta Sala a fin de dar tratamiento al recurso directo deducido por la parte actora contra la Resolución U.I.F. n° 03/2021, dictada con fecha 20/01/2021, mediante la cual el Sr. Presidente de la Unidad de Información Financiera rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por los sumariados y contra la Resolución U.I.F. n° 118/2021, dictada con fecha 1°/12/2021, en el marco del expediente administrativo n° 520/2017 del registro de la U.I.F., obrante en Secretaría en formato digital, que tuvo por acreditados los incumplimientos que a continuación se referirán y que sirvieron como fundamento para la aplicación de las sanciones de multas aquí impugnadas, a saber:

- multa por un monto de pesos siete millones ochocientos setenta y siete mil quinientos (\$7.877.500) a los Sres. María Natalia González Gordillo y Juan Ignacio Munafo, ambos en el doble carácter de Oficiales de Cumplimiento y de miembros del órgano de administración de Jim Automóviles S.A., ello bajo la invocación de lo dispuesto en los artículos 20 *bis*, 21 –incisos a) y b)–, 21 *bis* y 24 –incisos 1) y 3)– de la Ley n° 25.246 y sus modificatorias; de los artículos 3° –incisos a), b), c), d) e), f), y g)–, 4°, 6°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 –incisos b), c), d) y f)–, 19, 23, 24 y 26 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013; y en las Resoluciones U.I.F. nros. 11/2011 y 29/2013.

- igual sanción, por el mismo monto, se impuso a la firma Jim Automóviles S.A., medida sustentada en idénticos incumplimientos, por invocación de lo establecido en el artículo 24, inciso 2° de la referida Ley n° 25.246 y sus modificatorias.

Para así resolver, la autoridad administrativa en cuestión tuvo por verificadas las siguientes trece acciones y omisiones que fueron tenidas como trasgresiones al marco reglamentario aplicable:



-1) infracción a lo previsto en el inciso b) del artículo 3° y artículo 6° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por falta de registración en el SRO de la U.I.F. del oficial de cumplimiento;

-2) infracción a lo previsto en el inciso a) del artículo 3° y en el artículo 4° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por la falta de Manual de Procedimientos en materia PLA/FT;

-3) infracción a lo previsto en el inciso c) del artículo 3° y en el artículo 8° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013 por la falta de auditorías;

-4) infracción a lo previsto en el inciso d) del artículo 3° y en el artículo 9° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por la falta de capacitaciones;

-5) infracción a lo previsto en los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por la falta de política de identificación y conocimiento del cliente;

-6) infracción a lo previsto en el artículo 19 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por la falta de confección del perfil transaccional de clientes;

-7) infracción a lo previsto en el inciso a) del artículo 11, en el apartado II del artículo 12, apartado II inciso d) del artículo 13 e inciso b) del artículo 17 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013 y la Resolución n° 11/2011, por la falta de declaración jurada de los clientes respecto de su condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP);

-8) infracción a lo previsto en el inciso a) del artículo 11 e inciso b) del artículo 17 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, así como las previsiones contenidas en la Resolución U.I.F. n° 29/2013, por falta de cumplimiento de la obligación de constatar los listados de terroristas y organizaciones terroristas emitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU;

-9) incumplimiento a lo establecido en los incisos c), d), y f) del artículo 17° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por no implementar los procedimientos especiales de identificación de los clientes;

-10) infracción a lo establecido en el artículo 23 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por incumplimiento a la obligación de confeccionar legajos de los clientes;

-11) infracción a lo establecido en los incisos e), f) y g) del artículo 3° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por la falta de cumplimiento de la implementación de herramientas tecnológicas en materia PLA/FT, de un





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

sistema de alertas y de un registro de operaciones inusuales y de las operaciones sospechosas reportadas;

-12) infracción a lo establecido en el inciso b) del artículo 21 de la Ley nº 25.246 y sus modificatorias y de lo previsto en el artículo 26 de la Resolución U.I.F. nº 489/2013, por falta de cumplimiento de la obligación de reportar como sospechosas las operaciones identificadas como nros. 1, 2, 3, 4 y 5;

-13) incumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Resolución U.I.F. nº 489/2013, por la falta de conservación de la documentación requerida a los clientes.

II.- Que, contra dicha decisión, la firma Jim Automóviles S.A., el Sr. Juan Ignacio Munafo y la Sra. María Natalia González Gordillo, solicitan conjuntamente la revisión judicial de aquella (denominados todos los nombrados como “los sumariados”, v. fs. 1 del recurso interpuesto), en los términos de los artículos 25 de la Ley nº 25.246, 25 del Decreto nº 290/2007 y 33 de la Resolución U.I.F. nº 111/2012 (cfr. escrito de inicio digitalizado con fecha 02/03/2022, y agregado al Sistema de gestión judicial el 08/03/2022).

En síntesis, los recurrentes peticionan ante esta Alzada lo siguiente:

-Se declare la nulidad e inconstitucionalidad de las Resoluciones U.I.F. nros. 03/2021 y 118/2021 –como así también de la Resolución U.I.F. nº 133/2017 que dispuso la apertura del sumario–, por considerar que estos actos están afectados de un vicio en el elemento competencia (cfr. artículo 7, inc. a, de la Ley nº 19.549).

Respecto de esta defensa, estiman que la U.I.F. no tendría atribuciones para exigir el cumplimiento de obligaciones que, según la tesis sostenida, no los alcanzan, por no ser sujetos obligados incluidos en el catálogo del artículo 20 de la Ley nº 25.246, ni estar alcanzados por la Resolución U.I.F. nº 489/2013 vigente al momento de las pretendidas infracciones.

En ese orden de argumentos, sostienen que la U.I.F. se ha atribuido potestades legislativas para supervisar y sancionar a un sujeto que no se encuentra alcanzado por el listado de sujetos obligados taxativamente previsto por el legislador. Postulan, en tal sentido, que dicho obrar vulnera el principio de legalidad (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional), e incluso se habría extendido más allá del ámbito de actuación fijado por la propia normativa emitida por el organismo.



-En forma subsidiaria, solicitan que se dejen sin efecto las sanciones impuestas por la U.I.F., toda vez que interpretan que las Resoluciones que las disponen también resultan arbitrarias e ilegítimas en cuanto al contenido de lo allí decidido.

-A todo evento, para el supuesto de que no se hiciera lugar a lo pedido en los dos puntos precedentes, los recurrentes peticionan que se ordene a la U.I.F. modificar las sanciones de multa impuestas y disponer la aplicación de una medida correctiva (cfr. inciso 10 del artículo 14 de la Ley n° 25.246 y artículo 31 de la Resolución U.I.F. n° 111/2012), o bien, reducir significativamente el *quantum*, ponderándose para ello, los atenuantes que se presentan en el caso y el grave exceso de punición.

-Por último, requieren que las costas del presente proceso se impongan a la U.I.F. en caso de oposición.

A fin de dar fundamentos a sus pretensiones, los accionantes plantean las siguientes siete cuestiones:

i) La nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones por vicio en la competencia del órgano.

Sobre el punto, sostienen que el vicio en la competencia que plantean conlleva dos facetas. Por un lado, aducen que Jim Automóviles S.A. no es un sujeto obligado en los términos de la Ley n° 25.246, y por el otro que, como consecuencia de lo anterior, deducen que la U.I.F. carece de competencia para exigirles el cumplimiento de obligaciones que no alcanzan a los sumariados.

Sobre dicho planteo, estiman que, a la fecha de las pretendidas infracciones, no se encontraban sujetos a la fiscalización de la U.I.F., y por lógica implicancia, a su potestad sancionatoria.

En igual sentido, luego de transcribir lo normado por el artículo 20°, inciso 21 de la Ley n° 25.246 y por el artículo 2°, incisos a) y b) de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, refieren que surge con claridad que el sujeto obligado es quien realiza de manera habitual operaciones de compraventa de los bienes allí enumerados y se relaciona con sus clientes mediante operaciones de compraventa que éstos hacen con el sujeto obligado.

Dichas circunstancias, implicarían en la tesis que postulan, que Jim Automóviles S.A. no se encuentra comprendido en la referida categoría, por cuanto según destacan, la sociedad no realiza operaciones de compraventa de vehículos con la habitualidad exigida por la norma, sino que se dedica a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

intermediación entre comprador y vendedor, cobrando únicamente una comisión por tal labor.

Por lo demás, hacen referencia al cambio normativo ocurrido en el año 2019, oportunidad en la cual la U.I.F. modificó el texto del artículo 2° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013 mediante las disposiciones de la Resolución U.I.F. n° 117/2019.

En efecto, en referencia a ese cambio, postulan que, luego de producido –ello, con posterioridad a la fecha del período infraccional imputado en las Resoluciones– en el artículo 2° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013 se incorporaron supuestos distintos a la mera compraventa habitual en la definición de “Sujetos Obligados”.

En este orden de ideas, sostienen que, ni el legislador en el inciso 21 del artículo 20 de la Ley n° 25.246, ni la propia U.I.F. en el art 2° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, vigentes al momento de los hechos que aquí interesan, consideraban sujetos obligados a quienes se dedicaban a la intermediación entre las partes compradora y vendedora mediante el cobro de una comisión.

En lo atinente a la situación puntual del caso, señalan que Jim Automóviles S.A. no adquiría la titularidad de los vehículos a cambio de un precio, y tampoco transfería dicha titularidad a un comprador a cambio de un precio. Así, precisan que la actividad de la sociedad únicamente consistía en intermediar entre quien compraba y vendía; recibiendo, a modo de pago por los respectivos servicios, una comisión. Por lo que refieren que no detentaba en momento alguno la titularidad de los vehículos objeto de la compraventa celebrada entre terceros, ni percibía un precio por el valor de dichos bienes.

Así las cosas, estiman que no podría concluirse que la sociedad realizara con regularidad comercial operaciones que fueran objeto de la Ley n° 25.246. Añaden que ello fue reconocido en los Dictámenes Jurídicos de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la U.I.F..

Por todo ello, solicitan que se haga lugar al planteo de nulidad e inconstitucionalidad de las Resoluciones impugnadas.

ii) Como segundo punto, plantean que las resoluciones recurridas carecen de motivación suficiente para apartarse de los dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo.

Refieren que la Resolución U.I.F. n° 3/2021 es nula de nulidad absoluta toda vez que, según interpretan, el Sr. Presidente de la U.I.F. se apartó del



criterio de la Asesoría Legal, sin brindar suficiente y razonada motivación al hacerlo.

Sobre el recaudo en cuestión, señalan que los actos que puedan afectar derechos subjetivos o intereses legítimos deben ser necesariamente precedidos del dictamen de los órganos de asesoramiento jurídico permanente de la Administración. En estas condiciones, arguyen que la exigencia de motivación resulta inexcusable en los casos en que el órgano decisor se apartase de los fundamentos o conclusiones expuestas en los dictámenes jurídicos.

Adicionalmente, postulan que, de conformidad con lo previsto en el art. 16 de la Ley n° 25.246, si bien las decisiones de la U.I.F. son adoptadas por el Presidente del organismo, previa consulta obligatoria del Consejo Asesor, su opinión no le es vinculante. Por lo tanto, estiman que el Sr. Presidente, al dictar la Resolución n° 3/21, debió fundar con mayor rigor los motivos de su apartamiento del Dictamen Jurídico producido y la posterior conformidad de la instructora y el titular de la Dirección del Régimen Administrativo Sancionador.

En suma, en este apartado, los accionantes propugnan –en subsidio– que, para el caso de que no se hiciera lugar al planteo formulado en el apartado anterior, se declare la nulidad de las Resoluciones U.I.F. nros. 3/2021 y 118/2021 por los fundamentos que a continuación se pasan a reseñar.

ii.a) En primer lugar, plantean que el Sr. Presidente de la U.I.F. se habría apartado de forma arbitraria de las circunstancias de hecho y derecho acreditadas en el procedimiento sumarial.

En efecto, indican que al resolver se soslaya toda la documentación agregada al expediente (los certificados de transferencias, facturas, libros comerciales, balances, y demás), que acredita la circunstancia de no ser sujeto obligado la sociedad anónima sumariada.

Argumentan que, de la documentación referida se puede concluir con claridad que la operatoria que Jim Automóviles S.A. realiza con regularidad es la intermediación por la cual percibe un honorario o comisión por las gestiones y que, por el contrario, no ejerce, de modo alguno, con habitualidad la compraventa de los bienes, con la periodicidad y regularidad que admita considerarlo un sujeto obligado.

ii.b) Por otra parte, añaden que se ha vulnerado el principio de juridicidad, toda vez que la U.I.F. pretende ampliar el listado de sujetos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

obligados sin la debida base normativa, mediante una interpretación extensiva de la actividad realizada por los accionantes, que objetan los recurrentes.

En este sentido, se afirma que la conducta asumida por los sumariados, respecto de la registración ante la U.I.F., es inoponible por la demandada para atribuir a la sociedad encartada la calidad de sujeto obligado en los términos de la Ley n° 25.246. Agregan que, aun tratándose de un error de los directivos de Jim automóviles S.A., que procedieron a su inscripción en el Registro de la U.I.F., esta circunstancia no resultaría por sí misma suficiente para cargar contra ella las consecuencias y obligaciones legales que resultan de la Ley n° 25.246 en función de la calificación que se les atribuyó.

Por lo demás, expresan que el régimen de la PLA/FT (prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo) no es de adhesión voluntaria de los sujetos obligados, por lo tanto, mal puede sostenerse que la sola inscripción y la presentación de los Manuales de Cumplimiento hayan sido indicios suficientes para considerar a la sociedad como entidad obligada por la ley, y la actividad desarrollada como sujeta al control de las autoridades de la U.I.F..

ii.c) Por último, en lo que respecta a este punto, estiman que el Sr. Presidente de la U.I.F. se ha apartado de la interpretación literal del inciso 21, del artículo 20 de la Ley n° 25.246.

En concreto, sobre este tópico sostienen que, de la referida norma, se infiere que los sujetos obligados son todos aquellos que ejercen la actividad en forma “habitual”, y no respecto de cualquier actividad, sino específicamente en referencia al negocio jurídico de la “compraventa” de los bienes descriptos (automóviles, motos, camiones, etc.).

Sin perjuicio de ello, manifiestan que, contrariamente a lo que surge de la lectura de la norma, la U.I.F. sostuvo que de dicho artículo se extrae que comprende en igual forma a los sujetos que “intermedian en la compraventa” que realizan terceros. Circunstancia, que, según arguyen, implicaría una interpretación extensiva, no admitida por la ley.

iii) Como tercer apartado de sus planteos, postulan que existe un vicio en el procedimiento.

En concreto, manifiestan que se habría configurado un vicio en el procedimiento sumarial, por cuanto con posterioridad a la intervención del Consejo Asesor, las actuaciones deberían haber sido remitidas a la Dirección



de Asuntos Jurídicos del organismo, a efectos de ejercer el debido control de legalidad sobre una serie de puntos, entre los cuales indican: “-Los fundamentos vertidos por el Consejo Asesor para cambiar rotundamente el temperamento de la Asesoría Legal del Organismo; -Si se introdujeron nuevos hechos o elementos que justificaren la modificación de dicho temperamento; - Si se cumple acabadamente con la motivación de la decisión, pese a apartarse del dictamen de la DAJ...” (v. apartado VI.3 del recurso interpuesto).

En suma, exponen que la Dirección de Asuntos Jurídicos omitió ejercer el control de legalidad de los actos en la última instancia que se requirió su intervención, en función de lo cual deducen que se configura un vicio en el procedimiento, que conllevaría a la declaración de nulidad de las resoluciones impugnadas.

iv) En cuarto orden de sus planteos, postulan la inexistencia de elementos subjetivos para la atribución de responsabilidad a los sumariados.

En este sentido, apuntan que, dado que según la tesitura postulada, no encuadrarían en la categoría de “sujetos obligados” ante la U.I.F., no tenían la obligación de cumplir con los deberes cuyo “incumplimiento” se imputó en el sumario, y la U.I.F. no tenía competencia para exigirlo.

En este orden de ideas, exponen que correspondería desestimar la imposición de las multas aplicadas a la sociedad y a los Sres. María Natalia González Gordillo y Juan Ignacio Munafo –en su calidad de administradores y Oficiales de Cumplimiento–.

En referencia a ello, explican que se encuentra demostrado en las actuaciones que los nombrados no desplegaron la conducta ilícita que se les imputa, por lo cual, razonan que la sanción deviene infundada y las resoluciones recurridas resultan nulas por falta de causa.

Asimismo, añaden que, en el caso, se demostró que además de no existir acción típica por las conductas imputadas, tampoco se configuró el elemento subjetivo necesario para la imputación de los ilícitos previstos en la Ley n° 25.246. Al respecto, expresan que el principio de culpabilidad no solo se aplica al ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador, y que, merced a este principio, no basta la sola afectación o puesta en peligro de un bien jurídico, sino que no puede haber pena sin dolo o culpa.

Finalmente, citan jurisprudencia a fin de dar sustento a su tesitura.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

v) Por otra parte, postulan que los distintos criterios adoptados por las áreas de la U.I.F. son demostrativos en cuanto a que existen dudas razonables acerca de la obligación que tenían frente al sistema de PLA/FT.

Sobre estas discrepancias, indican que, en las distintas intervenciones dentro del procedimiento sancionatorio de marras, las direcciones del Régimen Administrativo Sancionador y de Asuntos Jurídicos proponen un criterio, mientras que, por otra parte, la Presidencia hace suyo el criterio contrario sostenido por el Consejo Asesor.

Esta circunstancia, según expresan, pone en evidencia al menos la falta de definición clara de la propia U.I.F. respecto de los hechos imputados y a la luz de la normativa vigente al momento de los hechos. En consecuencia, sostienen que se suscitan dudas razonables acerca de la obligación que tenían frente al sistema de PLA/FT, y mucho más antes de la entrada en vigencia de la Resolución U.I.F. n° 117/2019.

En este contexto, traen a colación diversos principios que refieren como “aplicables al ámbito de los procesos administrativos sancionadores” (v. página 57 del recurso interpuesto), entre los cuales mencionan el principio de la duda, el *in dubio pro reo* y el error excusable.

En consecuencia, enuncian que la interpretación sobre la adecuación de un hecho o conducta al tipo punitivo debe ser restrictiva y a favor del imputado. Máxime cuando la norma que regula la obligación supuestamente infringida “... es ambigua, imprecisa y poco clara, como ocurre en el *sub lite*, e incluso mereció una reforma en fecha posterior a los hechos que puso en evidencia la poca claridad sobre el punto en el pasado” (sic, página 57 del recurso interpuesto).

Así, subsidiariamente, sostienen que, para el caso que se considere que se ha verificado alguna conducta omisiva, se debería ponderar que, por la falta de precisión en la norma, la voluntad de la sociedad y de sus autoridades se encontraba viciada por error excusable y, como tal, cabría eximirlos de la aplicación de sanciones administrativas.

vi) Por lo demás, de forma subsidiaria, plantean la ilegitimidad y arbitrariedad de las multas impuestas por los cargos imputados.

En este tramo del recurso, argumentan que todas las imputaciones que la U.I.F. formula son ilegítimas, por cuanto las circunstancias que se alegan como incumplimientos o situaciones sospechosas no encuadran en los



supuestos tipificados en la normativa y se sustentan en meras apreciaciones de los funcionarios sobre pretendidas circunstancias calificadas como “sospechosas”.

En concreto, detallan las siguientes cuestiones y circunstancias:

vi.a) En lo atinente a la registración en el SRO de la U.I.F., señalan que, al describir la imputación, la accionada puso de resalto que de las constancias de registración en el Administrador SRO, figuraba como Oficial de Cumplimiento la Sra. María Natalia González Gordillo, pero que del acta de directorio N° 25, del 20 de abril del 2015 –aportada por los sumariados– surgía que el Oficial de Cumplimiento designado ante la U.I.F. era el Sr. Juan Ignacio Munafo.

En este sentido, postulan que, en los hechos, la sociedad contaba con un Oficial de Cumplimiento, a pesar de no estar debidamente registrado, lo que configuraba –en la tesis que propician– un mero error formal.

Así las cosas, estiman que, por la naturaleza meramente formal de la infracción, resulta irrazonable y desmedido el accionar de la U.I.F. al imponer las sanciones.

vi.b) Mención aparte, merece lo atinente a la supuesta falta de un Manual de Procedimientos en materia de PLA/FT.

En cuanto a este manual, los recurrentes sostienen que, al describir la imputación, la U.I.F. puso de resalto que la Instrucción “requirió al supervisado el Manual de Procedimientos para la prevención del Lavado de activos y Financiación del Terrorismo, no aportándolo o no contar con el mismo”. Sin perjuicio de ello, postulan que el referido manual fue acompañado en etapa sumarial. En consecuencia, señalan que el cargo imputado fue subsanado oportunamente.

Agregan que, aún para el supuesto en que se considere que el Manual de Procedimientos agregado no cumplía con las exigencias meramente formales, ello no equivale a la omisión total de contar con un Manual. Por lo que estiman que, dicha circunstancia, debería haber sido tenida en cuenta por la U.I.F. como un atenuante a la hora de imponer el máximo de la multa.

vi.c). Por otra parte, refieren que las Auditorías internas anuales en materia de PLA/FT eran llevadas a cabo por el propio administrador de la Sociedad, conforme lo disponen los artículos 3°, inciso c) y 8° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

Expresan que la norma en cuestión carece de criterio objetivo sobre la modalidad a seguir en la realización de las mentadas auditorías. De esta manera, y dentro de contornos laxos, indican que la sociedad pudo válidamente escoger el sistema de auditoría que mejor convino para su estructura y volumen de actividad.

De este modo, postulan que devienen improcedentes los cuestionamientos vertidos en la Resolución U.I.F. nº 118/2021 en tanto: “a) Jim Automóviles S.A. realizó auditorías internas con periodicidad; b) los antecedentes de la Sociedad no dejan observar antecedentes sobre reproche alguno, c) no existen pautas objetivas por parte de la Resolución U.I.F. Nº 489/2013 respecto del modo en que la auditoría interna debe llevarse a cabo; y d) el tamaño estructural y volumen operacional de la entidad hace que exista un sistema de auditoría permanente” (véase, página 62 del recurso interpuesto).

vi.d) Otro desarrollo, se vincula con las capacitaciones en materia de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Así, respecto de las capacitaciones para el personal en materia de PLA/FT, postulan que habían expresado en la etapa sumarial que el Sr. Juan Ignacio Munafo era quien capacitaba a sus empleados en éstas y otras materias que hacen al mejor desempeño de sus actividades, previniendo de tal modo cualquier situación irregular.

En referencia a ello, observan que, si bien la U.I.F. señaló que no se había acompañado documentación alguna que acreditara dichas capacitaciones, lo cierto era que, al igual que en el supuesto de las auditorías internas, la Resolución U.I.F. nº 489/2013 no establecía de qué modo debían realizarse las capacitaciones, no brindaba parámetros objetivos para ello, ni disponía cómo deben dejarse asentadas al ser llevadas a cabo.

vi.e) En cuanto a la determinación del perfil transaccional de los clientes, previsto en el artículo 19º de la Resolución U.I.F. nº 489/2013, destacan que el Sr. Juan Ignacio Munafo, en su doble carácter de Administrador y Oficial de Cumplimiento, conocía personalmente a los clientes con los que operaba Jim Automóviles S.A..

Por lo demás, arguyen que, ante la inexistencia de parámetros de riesgo determinados por la propia U.I.F., resulta imposible que los sumariados hayan incumplido con una carga que no existe específicamente.

vi.f) Por otra parte, también se expiden respecto de la identificación del cliente e implementación de herramientas tecnológicas, de un sistema de



alertas y de un registro de operaciones inusuales y de las operaciones sospechosas reportadas, para la PLA/FT.

Sobre este aspecto, señalan que, dado que los sumariados no son sujetos obligados ante la U.I.F., no tienen la obligación de cumplir con los deberes descriptos.

A todo evento, añaden que resulta injustificado exigir a una empresa como la de marras el cumplimiento de dichos deberes, por cuanto las operaciones que realiza mensual y anualmente son pocas, los clientes son personas conocidas por los miembros del órgano de administración, y todo lo que la Sociedad ha operado se encuentra debidamente registrado.

Sostienen, además, que iguales circunstancias se replican respecto del cargo sobre la implementación de herramientas tecnológicas, de un sistema de alertas y de un registro de operaciones inusuales y de las operaciones sospechosas reportadas, para la PLA/FT.

En suma, señalan que, por el poco volumen de operaciones que llevaba a cabo la sociedad, la cuales se encontraban todas y cada una de ellas debidamente registradas –incluso en el caso de haber sido sujetos obligados–, resulta irrazonable exigirles que costeen e implementen un sistema tecnológico que estudie y entrecruce los datos de las operaciones.

vi.g) De igual modo, objetan lo resuelto en torno de las operaciones sospechosas. Así, surge de autos que los recurrentes se agravan de “la supuesta falta de reporte de operaciones sospechosas” (sic, página 66 del recurso interpuesto), en referencia a las operaciones que se pasan a señalar.

-En primer lugar, se expresan respecto de la compra de tres (3) vehículos por parte del Sr. Juan Ignacio Munafo a la Sociedad por un monto de \$1.640.000. Al respecto, reiteran que, conforme se había señalado al presentar el descargo, las operaciones se realizaron dado que la compañía necesitaba el dinero para afrontar gastos corrientes (*v.gr.*, sueldos, cargas sociales, entre otros).

En este orden de razonamientos, indican que las operaciones fueron realizadas entre la entidad y su administrador, por lo que “lejos de ser sospechosas, están debidamente contabilizadas y facturadas” (cfr. página 66 del recurso interpuesto). Asimismo, refieren que el Sr. Juan Ignacio Munafo no era un sujeto obligado por haber comprado tres vehículos y que, a su vez, el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

hecho de que no se hubieren identificado los beneficiarios finales, no era un requisito exigido por la normativa.

-En segundo lugar, en lo atinente a la compra de la ART I. S.A. de un vehículo, por la suma de \$1.677.500 (según demás precisiones y detalle que surgen del sumario), destacan que Jim Automóviles S.A. no intervino en calidad de comprador ni vendedor en dicha operación.

En ese sentido, explican que, del formulario CETA obrante a fs. 198 del expediente, surge que el rodado objeto de la mentada operación pertenecía a determinada persona física (el Sr. F. A. B.), quien le vendió el rodado a la firma en cuestión (Aseguradora de Riesgos del Trabajo I. S.A.). En este sentido, aducen que Jim Automóviles S.A. no llevó a cabo una actividad de compraventa, sino únicamente de intermediación.

Por lo demás, se pone de resalto que la U.I.F. consideró que lo que caracterizó de “sospechosa” a esta puntual operación, fue el hecho de que en agosto del 2016 la Superintendencia de Seguros de la Nación le revocó a la ART adquirente del vehículo la autorización para operar, y en el marco de una supervisión *in situ*, se detectó respecto de los estados contables al 31 de diciembre de 2015, la inexistencia de saldos bancarios declarados por \$203.500.000 y el ocultamiento de 5.000 juicios, determinando que el patrimonio negativo neto era de \$760.000.000 y un déficit de capital de \$1.400.000.

Sobre este punto, estiman que se deberá valorar el factor temporal de los referidos hechos, pues la U.I.F. imputa como sospechosa una circunstancia que tuvo lugar más de un año después de la compraventa analizada, a saber: la venta del rodado a la ART data de julio del 2015, mientras que la SSN revocó la autorización de ésta última en agosto de 2016.

En suma, manifiestan que, al momento de celebrarse la operación objetada, no se tenía conocimiento de ninguna circunstancia sospechosa, toda vez que, hasta ese momento, la SSN no había revocado la referida autorización.

-Como tercer punto de este acápite, formulan argumentos en torno de la transferencia de un vehículo por la suma de \$1.400.000 (habida entre una persona cuyas siglas son G. R. B., en favor de otra M. J. A.).



Sobre esta operación, aducen que Jim Automóviles S.A. no compró ni vendió, sino que, únicamente actuó como intermediario de la misma (conforme surgiría del formulario CETA que obra a fs. 172 del expediente).

-En cuarto lugar, vierten comentarios sobre dos compras de un sujeto a una sociedad anónima (en concreto, respecto compras que realizó una persona cuyas siglas son W. A. H. por la suma de \$670.000). En lo concerniente a esta operación, sostienen que Jim Automóviles S.A. desarrolló un rol de intermediario y únicamente cobró una comisión por su actividad, lo cual fue reflejado en la respectiva factura (conforme surgiría del formulario CETA obrante a fs. 134/136).

-Por último, refieren que la U.I.F. reputa como sospechosa una adquisición de una sociedad de responsabilidad limitada a una persona física, por la suma de \$750.000, según demás detalles precisados en autos.

Sobre este punto, postulan que dicha operación no fue llevada a cabo por la sociedad ni por sus propietarios, sino por otra persona (cuyas siglas son M. G. O., según señalan que fue agregado como Prueba n° 3 al descargo efectuado por los sumariados, donde constan los datos completos y demás circunstancias del episodio).

En función de lo manifestado, consideran que las circunstancias fácticas reseñadas acreditan que Jim Automóviles S.A. únicamente intervino como vendedor en las operaciones celebradas con Juan Ignacio Munafo, su administrador, lo cual está debidamente registrado, y lejos de configurar habitualidad, consistieron en tres (3) operaciones aisladas que tuvieron una razón de ser clara y específica.

En definitiva, postulan que ninguna de las operaciones reprochadas puede ser considerada sospechosa en virtud de la normativa en la materia, toda vez que, como han sido descriptas por la U.I.F., no configuran ninguna situación inusual.

En este orden de ideas, añaden que una concesionaria de intermediación en la venta de automóviles no es un sujeto especializado en la materia financiera y/o con una actividad directamente vinculada a operaciones de auditoría complejas.

Así las cosas, consideran que no puede requerirse al titular de un negocio, que la propia norma en su literalidad no configuraría como sujeto obligado y que por la naturaleza de su operatoria no está dotado de una alta





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

especialización o experiencia técnica y particular idoneidad en cuestiones que atañen al sistema de PLA/FT, que advierta circunstancias que no resultaban manifiestas y eran de muy difícil comprobación en el momento en que tuvieron lugar las operaciones.

vi.h) Por otra parte, respecto de la infracción de la obligación prevista en el artículo 24 de la Resolución U.I.F. nº 489/2013, postulan que toda la documentación respaldatoria, sin excepción alguna, ha sido conservada por la sociedad recurrente, lo cual se puede verificar indubitadamente de aquella acompañada en el proceso sumarial.

Concluyen, de este modo, que el reproche sancionatorio impuesto por esta imputación carecería de todo asidero fáctico y legal, y también debería ser desestimado.

vii) Por último, arguyen que las multas impuestas afectan el principio de proporcionalidad, y que reflejarían un exceso de punición.

Paralelamente, plantean la inconstitucionalidad del monto mínimo de la pena prevista por el artículo 24, inciso 1º de la Ley nº 25.246.

En concreto, postulan que, en todos los casos, es decir, en los doce cargos por infracciones formales, se impuso la multa máxima legal admitida (cfr. artículo 24, inc. 3, de la Ley nº 25.246), consistente en la suma de \$100.000 cada una, “sin ofrecer ninguna explicación razonable sobre el tenor de las mismas, ni de la pertinencia de la graduación máxima de la pena impuesta” (véase, página 72 del recurso interpuesto).

Asimismo, toman en cuenta que, junto con ello, se impuso la multa por el monto de seis millones seiscientos setenta y siete mil quinientos pesos (\$6.677.500) a cada uno, por la supuesta omisión de efectuar cinco reportes de operación sospechosa, conducta que, según estiman, quedó exclusivamente vinculada a extremos netamente formalistas y que no tuvieron virtualidad para generar un riesgo autónomo y concreto en el sistema de PLA/FT.

En definitiva, expresan que en el acto sancionatorio se adoptó el valor de las operaciones de compraventa, pese a que, en cuatro de ellas, solamente Jim Automóviles S.A. percibió una comisión muy menor en comparación con las sumas involucradas. En este sentido, arguyen que la U.I.F. incurrió en un manifiesto exceso de punición.

En suma, peticionan que, para el caso en que se decida no hacer lugar al pedido de nulidad e inconstitucionalidad de las Resoluciones impugnadas, se



ordene a la U.I.F. modificar la sanción de multa impuesta y se disponga la aplicación de una medida correctiva (cfr. artículos 14, inciso 10, de la Ley n° 25.246 y artículo 31 de la Resolución U.I.F. n° 111/2012), o bien, se ordene reducir su cuantía al mínimo legal.

A fin de dar sustento a esta tesis, sostienen que la sanción penal administrativa ha de respetar necesariamente el principio de proporcionalidad entre la pena prevista en la norma y la conducta desplegada por el particular, sobre la base de la regla de razonabilidad cuya valoración debe responder a la realización del bien jurídico tutelado y su significado social, que configura la finalidad perseguida por la ley.

Así también, plantean la inconstitucionalidad del monto mínimo de la pena prevista por el artículo 24, inciso 1° de la Ley n° 25.246 para la multa por la omisión de efectuar los “...reportes de operaciones sospechosas”.

Sobre este aspecto, indican que la Ley Antilavado, en cuanto al incumplimiento del deber de reporte, establece sanciones de suma gravedad cuya aplicación –aun del mínimo de la escala legal a casos como el del sumario administrativo que da base a esta causa–, implica una vulneración a los principios de razonabilidad y de congruencia entre los hechos imputados y la sanción a aplicar.

A todo evento, dejaron planteado el caso federal, con miras a ocurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los términos del art. 14 de la Ley n° 48.

III.- Que, corrido el traslado del recurso interpuesto, éste fue contestado por la U.I.F., quien reivindicó la validez de lo actuado, solicitando el rechazo del recurso, con costas (cfr. escrito digitalizado con fecha 21/12/2022, agregado al sistema *Lex100* el 26/12/2022).

IV.- Que, a su turno, el Sr. Fiscal General en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal, se expidió favorablemente respecto de la competencia de este Tribunal para entender en el asunto, así como en punto a la admisibilidad formal del recurso articulado (véase, el dictamen del 1º/02/2023, agregado con fecha 06/02/2023).

En este contexto, se consideró que la causa se encontraba en condiciones de ser resuelta.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

Por lo demás, el representante del Ministerio Público se expidió respecto el planteo de inconstitucionalidad del inciso 1º, del artículo 24, de la Ley nº 25.246.

Al respecto, recordó que la declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de suma gravedad institucional, a punto tal que debe ser considerada como *ultima ratio* del orden jurídico (*Fallos*: 312:122, entre muchos otros), debiendo, en caso de duda, estarse a su constitucionalidad.

Asimismo, indicó que pesa sobre quien pretende esa declaración acreditar los extremos que comprueben –en forma concluyente– su admisibilidad (*Fallos*: 327:5147), y revestir a su presentación de la rigurosidad argumental y precisión que la naturaleza de la decisión requerida exige (doct. *Fallos*: 270:124, 301:1062, 327:5605, 328:1416, entre otros).

Sobre la base de la citada jurisprudencia, el Sr. Fiscal estimó que la presentación de los actores contenía aseveraciones meramente genéricas e hipotéticas sobre la supuesta irrazonabilidad y desproporción de la escala prevista en la norma cuestionada.

Por lo demás, postuló que, considerando el objetivo disuasivo perseguido por el legislador al establecer las sanciones, los recurrentes no habían logrado demostrar que la fijación de la multa se evidenciara como irrazonable. Máxime cuando guardaba relación directa con el hecho punible (v. *mutatis mutandis Fallos*: 322:2346).

En estos términos, concluyó que el planteo de los apelantes evidenciaba un mero desacuerdo con la solución prevista de forma general por el legislador y carecía de un análisis riguroso que permitiera tener por cumplidos los recaudos exigidos por el Máximo Tribunal para una declaración de esa índole.

Por tales motivos, sostuvo que correspondía rechazar el planteo constitucional bajo análisis.

Finalmente, respecto al planteo de aplicación de determinados principios del derecho penal al ámbito administrativo sancionador, señaló que la Corte Suprema había sostenido que los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas (*Fallos*: 289:336; 329:3666, entre muchos otros), en la medida en que resultaran compatibles con la finalidad y principios específicos del derecho administrativo (citó, a tal efecto, el dictamen de la Procuración General de la Nación, *in re* “Pirelli y E.



SpA y otros”, causa n° P. 208, L. XLVII, al que remitió la Corte Suprema en su pronunciamiento del 10/03/2014).

En síntesis, el Sr. Fiscal de Cámara expresó que, si bien se admitía la aplicación de los principios y garantías propios del derecho penal a casos de derecho administrativo sancionador, en definitiva, tal aplicación dependería de la valoración de su compatibilidad que realizara el juzgador, en cada caso concreto, ponderando por un lado los hechos y particularidades del caso y, por otro, los bienes o intereses jurídicamente tutelados en la norma administrativa según la cual se había impuesto la sanción.

Dejó así contestada la vista conferida y solicitó ser notificado de la resolución que oportunamente se dictara.

V.- Que, sentado lo expuesto es de recordar que en cada caso que llega a un estrado judicial, quien ejerce la Magistratura debe realizar una verdadera reconstrucción histórica con el objeto de determinar si los hechos propuestos por las partes son ciertos, o no. Para ello, se han de examinar detenidamente las postulaciones y argumentos de las partes, así como las pruebas rendidas, apreciarlas con criterio lógico jurídico y finalmente, asignarles su valor de acuerdo con las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, constituyendo tales circunstancias un límite especial a la fundamentación de sus argumentaciones (cfr. esta Sala, con otra integración, *in re*: “Gordillo, Jorge Horacio c/ E.N. -Min. de Trab. y Seg. Social s/ empleo público”, causa n° 1.594/1991, sentencia del 8/06/1995 y, con una integración actual, *in rebus*: “Cervantes S.A. c/ E.N. -M° del Interior s/ daños y perjuicios”, causa n° 41.031/2004, sentencia del 22/03/2012; “Ingeniería Saiver S.R.L. c/ E.N.-EMGE-Plan Provi Agua y otro s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 16/10/2014, en especial, considerando VII, y sus citas; “Syphon S.A. c/ E.N.-M° Industria -SIC y PYMES- Resol. 54/05- Exp. S01:73989/05- s/ proceso de conocimiento”, causa n° 14.810/2011, sent. del 10/11/2016; y “C., F. R. c/ E.N. -M° Justicia- P.S.A.- Dto. 1088/03 y otro s/ persona militar y civil de las FFAA y de seg.”, causa n° 23.232/2009, sentencia de fecha 20/04/2017, entre otras).

Asimismo, sobre quienes tenemos la misión de impartir justicia no pesa la obligación de seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso, y que basten para dar sustento a un





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., *Fallos*, 258:308; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros).

VI.- Que, previo a abordar los agravios esbozados por los recurrentes, y con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, conviene reseñar las circunstancias fácticas del caso.

En este cometido, cabe señalar que de las constancias del expediente administrativo n° 520/17 –cuya copia digitalizada fue acompañada por la accionada el 18/04/2022, y se encuentra agregada al Sistema de Gestión Judicial con fecha 25/04/2022–, surge que:

i) Con fecha 17/03/2017, mediante la “orden de verificación n° 11/2017” se dispuso la realización de los procedimientos necesarios a fin de verificar el cumplimiento por parte del Sujeto Obligado Jim Automóviles S.A. a efectos de evaluar el grado de cumplimiento conforme a la normativa (v. fs. 1 de las actuaciones administrativas).

ii) A fs. 4 y vta. de las actuaciones administrativas se encuentra glosada la “nota de requerimiento n° 40/2017”, suscripta con fecha 10/03/2017, mediante la cual se requirió a Jim Automóviles S.A. la documentación e información allí detallada.

iii) A fs. 5/7 luce agregada el acta de constatación efectuada el 29/03/2017, mediante la cual se dejó constancia que se hizo entrega a los aquí actores de la “orden de verificación n° 11/2017” y de la “nota de requerimiento n° 40/2017”.

Asimismo, se indicó que fue requerida bajo apercibimiento de ley, la documentación detallada en la “nota de requerimiento n° 40/2017”, haciendo entrega y/o informando al Oficial de Cumplimiento, conforme el detalle vertido en dicha pieza.

iv) A fs. 247/254 se encuentra agregado el Informe Final efectuado con fecha 10/05/2017 realizado por la Dirección de Supervisión de la U.I.F..

En dicha actuación se concluyó –entre varias cuestiones– que: “I. Tanto Jim Automóviles S.A. como así también el Sr. Juan Ignacio Munafo, quien manifestó realizar operaciones de compraventa de automóviles como persona física (en carácter de monotributista), están obligados a informar ante esta Unidad Financiera, conforme lo estipula el artículo 21 de la Ley 25.246. II. Ahora bien, en atención a la verificación in situ efectuada, de la evaluación del grado de cumplimiento de la Política de Identificación del Cliente y de la Política de Reportes adoptada por Jim Automóviles S.A., y en función de las consideraciones vertidas en cada uno de los puntos que integran



el análisis de la documentación e información verificada, se advierte que el sujeto obligado incumple de manera absoluta con las disposiciones normativas emanadas de la resolución U.I.F. N° 489/2013 y modif....”.

En suma, se indicó que correspondía remitir las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos, “... sugiriendo el inicio del procedimiento sumarial correspondiente, acorde a la cantidad de incumplimientos detectados, conforme lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley 25.246 y sus modificatorias”.

v) Mediante la Resolución U.I.F. n° 133, de fecha 29/11/2011 (v. fs. 289/307 de las actuaciones administrativas), se ordenó instruir sumario a los efectos de establecer la responsabilidad que le pudiere corresponder a la firma Jim Automóviles S.A., a su órgano de administración y a los oficiales de cumplimiento que se encontraban en funciones en la época que los presuntos incumplimientos habrían tenido lugar.

Ello así, con el fin de determinar si la conducta de aquéllos era pasible de la multa prevista en el artículo 24 de la Ley n° 25.246 y modificatorias.

Para disponer lo cual, se entendió que habían incumplido, *prima facie*, las previsiones contenidas en los artículos 20 *bis*, 21 inciso a) y b), y 21 *bis* de la Ley n° 25.246 y sus modificatorias, y en los artículos 3° incisos a), b), c), g), 4°, 6°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 incisos c), d) y f), 19, 23, 24 y 26 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013 y sus modificatorias, en la Resolución U.I.F. n° 50/2011 y modificatoria, en la Resolución U.I.F. n° 11/2011 y su modificatoria y el en último párrafo del artículo 1° de la Resolución U.I.F. n° 29/2013.

vi) En tales condiciones, con fecha 18/12/2017 se asumió la instrucción del sumario, y se procedió a citar en calidad de sumariados a: Jim Automóviles S.A., a la Sra. María Natalia González Gordillo y al Sr. Juan Ignacio Munafó, ambos en su doble carácter de miembros del órgano de administración (directorio) y como oficiales de cumplimiento, conforme Acta de Directorio n° 25 de fecha 20/04/2015 y registro SRO fs. 240/241.

Asimismo, se les hizo saber que podrían presentar descargo y ofrecer prueba dentro de los diez días hábiles administrativos, y que podrían tomar vista de las actuaciones en la sede de la U.I.F. (v. fs. 313 y vta. de las actuaciones administrativas).

vii) De este modo, los sumariados presentaron su respectivo descargo en forma conjunta y ofrecieron prueba (cfr. fs. 370/704).

viii) En tales condiciones, se procedió a abrir la causa a prueba y a citar a los sumariados para que comparecieran a prestar declaración, en los términos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

del artículo 27 de la Resolución U.I.F. n° 111/2012 (cfr. fs. 705/706 de las actuaciones administrativas).

En este orden, se labraron actas de la audiencia celebrada el 21/06/2018, en las que prestaron declaración el Sr. Juan Ignacio Munafo –en nombre propio y en representación de Jim Automóviles S.A.– y la Sra. María Natalia González Gordillo en nombre propio (*vide* fs. 741/744 vta.).

ix) Con fecha 10/10/2018 la Sra. Instructora Sumariante, en el entendimiento de que no existía prueba pendiente de producción, dio por concluido el período probatorio y ordenó correr el traslado previsto en el art. 29 de la Resolución U.I.F. n° 111/2012, a fin de que los sumariados presentasen sus alegatos (cfr. fs. 758 de las actuaciones administrativas), lo que fue cumplido a fs. 760/771 de las actuaciones administrativas.

x) En tales condiciones, la instrucción tuvo por presentado en tiempo y forma el alegato deducido por los encartados.

Por lo demás, se advirtió que los sumariados habían efectuado un planteo de falta de legitimación pasiva, por considerar que no resultaban sujetos obligados ante la U.I.F. en los términos del artículo 20 de la Ley n° 25.246 y conforme lo establecido en el artículo 2 de la Resolución U.I.F. n° 489/2012. En virtud de ello, se dio intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos a fin de que se expidiera sobre la cuestión planteada (cfr. fs. 772/773 de las actuaciones administrativas).

xi) Con fecha 17/04/2019, tomó intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos a los efectos de tratar la excepción de previo y especial pronunciamiento, referente a la alegada falta de legitimación pasiva.

En dicha oportunidad la referida Dirección puso de resalto que “...de las constancias obrantes en el expediente, y de las explicaciones brindadas en el descargo y alegato, surge que Jim Automóviles S.A. asumió un rol de intermediario en diversas compraventas realizadas según el muestreo solicitado. En razón de su actividad, cobraba una comisión de intermediación, según surge de las constancias obrantes a fs. 104 y 111/239...” (v. fs. 776 de las actuaciones administrativas).

Sin embargo, se señaló que a fs. 105/109 lucían agregadas tres facturas que reflejaban que Jim Automóviles S.A. había vendido a Juan Ignacio Munafo tres vehículos.

Sin perjuicio de ello, el Sr. Director de Asuntos Jurídicos postuló que, de acuerdo a la documentación aportada (en especial, fs. 104 y 111/239), surgía que Jim Automóviles S.A. no realizaba como actividad habitual la compra o



venta de vehículos. A partir de esta comprensión, el funcionario interpretó que no se podía concluir que fuera un sujeto obligado en los términos del inciso 21 del artículo 20 de la Ley n° 25.246.

En suma, se concluyó que correspondía hacer lugar a la defensa esgrimida, correspondiendo excluir a Jim Automóviles S.A. del sumario administrativo y, en consecuencia, a su oficial de cumplimiento y miembros del órgano de administración (v. Dictamen n° 130/19, obrante a fs. 774/777 de las actuaciones administrativas).

xii) Con fecha 20/10/2019 fue producido el Informe Final, conforme lo normado por el artículo 30 de la Resolución U.I.F. n° 111/2012.

Del texto de la respectiva copia se desprende que el Sr. Instructor Sumariante aconsejó, sobre la base de los elementos probatorios reunidos en autos y el análisis efectuado, hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por los sumariados y absolver de responsabilidad a Jim Automóviles S.A., a la Sra. María Natalia González Gordillo y al Sr. Juan Ignacio Munafo y, en consecuencia, absolver a los sumariados. Ello, sin adentrarse en el análisis de los cargos endilgados en la Resolución de Instrucción (v. fs. 784/788 vta. de las actuaciones administrativas).

xiii) A su turno, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la U.I.F. emitió el Dictamen n° 04/20, por medio del cual expresó que no se habían hallado observaciones de índole legal que pudieran formularse a la prosecución del trámite (cfr. fs. 797/804 de las actuaciones administrativas).

Al expedirse dicha dependencia, se puso de resalto que las conclusiones arribadas en el Informe Final elaborado por la Instrucción se basan en la opinión de esa Asesoría, por lo que, correspondía hacer lugar a la falta de legitimación pasiva interpuesta por los sumariados y, en consecuencia, absolverlos de responsabilidad.

En lo atinente al planteo de inconstitucionalidad de la Resolución U.I.F. n° 111/2012, la referida Dirección sostuvo que debía tenerse presente que esa instancia procedimental administrativa no era la adecuada para sustanciar tal pretensión, y que el funcionario a cargo de la U.I.F. carecía de facultades jurisdiccionales para pronunciarse al respecto.

Asimismo, se indicó que, si bien la doctrina y jurisprudencia habían aceptado la consideración de planteos de inconstitucionalidad de una norma en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

sede administrativa (o la inaplicación de una disposición tachada de inconstitucional), lo cierto era que para que ello procediera, debían concurrir ciertos requisitos, que no se verificaban en el caso.

Por último, se expresó que el proyecto de resolución contenía todos los elementos esenciales de los actos administrativos (cfr. artículo 7° de la Ley n° 19.549).

xiv) A fs. 806 y vta. obra agregada el Acta n° 384 dando cuenta de la Sesión del 03/12/2020 del Consejo Asesor de la U.I.F..

En el acta indicada se certificó que el Cuerpo Asesor sostuvo que “... analizadas las actuaciones, no se comparten los argumentos de índole formal vertidos en los dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos de fs. 774/777 y fs. 797/804... No se evidencian en los referidos dictámenes sustento material eficiente para fundar tal conclusión, salvo el haber hecha suyas las propias alegaciones de los sumariados; asimismo, se advierte un evidente desconocimiento del propósito perseguido para la inserción de esta categoría de sujetos obligados en la norma legal argentina...” (sic, fs. 806 de las actuaciones administrativas).

En ese orden de razonamientos, se sostuvo que “el elenco de Sujetos Obligados se encuentra taxativamente enumerado en el Art. 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, conforme dicho artículo, revisten tal condición y están obligados a informar a la U.I.F.: ‘inciso 21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodino’...”.

Así también, se agregó que “...tomando en cuenta lo dispuesto en las Recomendaciones 22 y 25 del GAFI relativas a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) se establece que las mismas deben cumplir los requisitos de debido diligencia del cliente (DDC) y el mantenimiento de registros establecidos en las Recomendaciones 10 y 11, y las Recomendaciones 12 (PEP), 15 (Nuevas tecnologías) y 17 (Dependencia en terceros), como así también les resultan aplicables los requisitos plasmados en las Recomendaciones 18, (Programas de Cumplimiento de PLA/FT), 19 (Países de mayor riesgo), 20 (ROS) y 21 (Exención de responsabilidad y *tipping off*) del GAFI...”.

En virtud de ello, el Cuerpo Asesor de la U.I.F. expresó que “[r]esulta claro entonces que estos agentes, con motivo de la relevante ubicación que tienen en distintos sectores de la actividad económica, son designados como “Sujetos Obligados”, están alcanzados por la norma legal y reglamentaria y obligados a cumplir con los deberes de información y reporte de operaciones sospechosas ante la U.I.F., precisamente por su propia actividad de intermediación entre los compradores y vendedores de bienes.



por su conocimiento directo e inmediato de los clientes, de su capacidad económica y demás modalidades de su operatoria”.

En suma se concluyó que la defensa opuesta no debía prosperar, en tanto la encartada sí reviste la condición de “Sujeto Obligado” del ordenamiento respectivo. Para arribarse a dicha conclusión, se agregó:

“...la propia actividad desarrollada por la entidad involucrada, que motivó su necesario registro como Sujeto Obligado ante la U.I.F. –con fecha 20/11/2014; fs. 1/2– y las constancias incorporadas en el expediente, llevan a concluir que la sociedad de marras reviste la calidad de Sujeto Obligado, en los términos del artículo 20, inciso 21) de la ley N° 25.246 y sus modificatorias, por lo tanto le resulta plenamente aplicable la normativa reglamentaria vigente –a la fecha de la constatación de los incumplimientos– en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo específica para el sector de que se trata (Resolución U.I.F. N° 489/2013), como asimismo la demás normativa reglamentaria U.I.F. de aplicación general a los sujetos obligados (Resoluciones U.I.F. N° 50/2011, 11/2011 y 29/2013)...” (sic, fs. 806 vta. de las actuaciones administrativas).

Finalmente, se sugirió a la Presidencia de la Unidad que se procedieran a ponderar en forma detallada los diversos incumplimientos acreditados en autos que hacían al deficiente funcionamiento de su Sistema de PLA/FT y consecuentemente con ello se propusieran las sanciones que se estimaran corresponder.

xv) Mediante Resolución n° 03, de fecha 20/01/2021, dictada por el Sr. Presidente de la U.I.F. (cfr. fs. 807/814 vta. del expediente administrativo sustanciado), fue rechazada la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por los sumariados y se ordenó remitir las actuaciones a la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador a fin de que tomara la intervención de su competencia.

Para así decidir, el Sr. Presidente de la U.I.F. indicó que no compartía la valoración de la prueba ni la interpretación del derecho que había efectuado la Dirección de Asuntos Jurídicos en sus dos intervenciones.

En este sentido, efectuó un señalamiento, poniendo de resalto que “las constancias obrantes” en el expediente habían sido las mismas que, en su oportunidad y con el dictamen favorable de esa misma asesoría legal (v. fs. 257/267), habían fundamentado el dictado de la resolución de apertura del procedimiento sumarial.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

Asimismo, indicó que *a posteriori*, no se había producido prueba alguna que demostrara en forma asertiva la falta de calidad de sujeto obligado de Jim Automóviles S.A.. En efecto, sostuvo que la prueba producida por el sumariado no era conducente a dichos fines.

Siguió razonando, en el sentido de que, en el criterio sostenido en los dictámenes referenciados, incluso se había omitido considerar la prueba agregada en autos que acreditaban tal calidad, entre ellos, la propia conducta del sumariado que había procedido a registrarse como tal ante la U.I.F. y que, en tal carácter, había agregado como prueba documental el “Manual de Procedimiento en materia de Prevención de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

En lo atinente a las pruebas documentales agregadas como “Nros. 2 y 3” – copias de una Resolución Judicial y de un Estado de Dominio e histórico de Titularidad, postuló que en nada acreditaban las circunstancias de no ser sujetos obligados.

En igual sentido, el Sr. Presidente refirió que “las explicaciones brindadas en el descargo” –por la cuales los sumariados pretendían que Jim Automóviles S.A. no era sujeto obligado antes la U.I.F.– eran meras alegaciones que no se encontraban respaldadas por prueba alguna y, como tal, carecían de todo valor.

En este marco, el Sr. Presidente de la entidad indicó que dictaría la resolución apartándose del criterio propuesto por la Dirección de Asuntos Jurídicos en los dictámenes referenciados. En tal sentido, postuló que compartía todos y cada uno de los argumentos fácticos y jurídicos esgrimidos por el Consejo Asesor en el Acta de fecha 03/12/2020.

En suma, por tales fundamentos rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por los sumariados.

Asimismo, ordenó la remisión de las actuaciones a la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, a fin de que, en cumplimiento y en los términos del artículo 30 de la Resolución U.I.F. nº 111/2012, procediera al análisis de todas las cuestiones planteadas por los sumariados en sus presentaciones de fs. 371/395 Y 709/721, así como de los cargos endilgados en la resolución de Instrucción.

xvi) Con fecha 12/03/2021 el Departamento de Instrucción certificó el cumplimiento formal de las etapas del procedimiento sumarial según lo



previsto en la resolución U.I.F. n° 111/12 (v. fs. 820/821 del expediente administrativo).

xvii) A fs. 822/849 obra agregado el Informe Final efectuado por el Instructor Sumariante con fecha 12/03/2021.

xviii) Por lo demás, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la U.I.F. emitió el Dictamen n° 54/21, con fecha 09/11/2021, por medio del cual expresó que no se habían hallado observaciones de índole legal que pudieran formularse a la prosecución del trámite (cfr. fs. 899/939 de las actuaciones administrativas).

xix) Finalmente, mediante Resolución n° 118, de fecha 01/12/2021, dictada por el Sr. Presidente de la U.I.F. (cfr. fs. 942/989 vta. del expediente administrativo sustanciado), declaró la responsabilidad de Jim Automóviles S.A., de la Sra. María Natalia González Gordillo y del Sr. Juan Ignacio Munafo. En virtud de lo cual impuso las sanciones de multa, según el siguiente detalle:

– multa por un monto de pesos siete millones ochocientos setenta y siete mil quinientos (\$7.877.500), a los Sres. María Natalia González Gordillo y Juan Ignacio Munafo, ambos en su doble carácter de Oficiales de Cumplimiento y miembros del órgano de administración de Jim Automóviles S.A., ello bajo la invocación de lo dispuesto en los artículos 20 *bis*, 21 –incisos a) y b)– y 21 bis de la Ley n° 25.246 y sus modificatorias; de los artículos 3 –incisos c), d) e), f), y g)–, 4, 8, 9, 10, 11, 11–inciso a)–, 12, 12 –apartado II–, 13 –apartado II–, 17 –incisos b), c), d) y f)–, 19, 23 y 24 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013; y en las Resoluciones U.I.F. nros. 11/2011 y 29/2013.

– multa, por el mismo monto antes indicado, queu fue impuesta a la firma Jim Automóviles S.A.; medida sustentada en idénticos incumplimientos, por invocación de lo establecido en el artículo 24, inciso 2° de la referida Ley n° 25.246 y sus modificatorias.

Para así decidir, la autoridad administrativa en cuestión tuvo por verificadas las siguientes trece acciones y omisiones que fueron merituadas como trasgresiones al marco reglamentario aplicable:

-1) infracción a lo previsto en el inciso b) del artículo 3° y artículo 6° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por falta de registración en el SRO de la U.I.F. del oficial de cumplimiento;





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

-2) infracción a lo previsto en el inciso a) del artículo 3° y en el artículo 4° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013 por la falta de Manual de Procedimientos en materia PLA/FT;

-3) infracción a lo previsto en el inciso c) del artículo 3° y en el artículo 8° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por la falta de auditorías;

-4) infracción a lo previsto en el inciso d) del artículo 3° y en el artículo 9° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013 por la falta de capacitaciones;

-5) infracción a lo previsto en los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por la falta de política de identificación y conocimiento del cliente;

-6) infracción a lo previsto en el artículo 19 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por la falta de confección del perfil transaccional de clientes;

-7) infracción a lo previsto en el inciso a) del artículo 11, en el apartado II del artículo 12, apartado II inciso d) del artículo 13 e inciso b) del artículo 17 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013 y la Resolución n° 11/2011, por la falta de declaración jurada de los clientes respecto de su condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP);

-8) infracción a lo previsto en el inciso a) del artículo 11 e inciso b) del artículo 17 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, así como las previsiones contenidas en la Resolución U.I.F. n° 29/2013, por falta de cumplimiento de la obligación de constatar los listados de terroristas y organizaciones terroristas emitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU;

-9) incumplimiento a lo establecido en los incisos c), d), y f) del artículo 17° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por no implementar los procedimientos especiales de identificación de los clientes;

-10) infracción a lo establecido en el artículo 23 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por incumplimiento a la obligación de confeccionar legajos de los clientes;

-11) infracción a lo establecido en los incisos e), f) y g) del artículo 3° de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, por la falta de cumplimiento de la implementación de herramientas tecnológicas en materia PLA/FT, de un sistema de alertas y de un registro de operaciones inusuales y de las operaciones sospechosas reportadas;

-12) infracción a lo establecido en el inciso b) del artículo 21 de la Ley n° 25.246 y sus modificatorias y de lo previsto en el artículo 26 de la



Resolución U.I.F. n° 489/2013, por falta de cumplimiento de la obligación de reportar como sospechosas las operaciones identificadas como nros. 1, 2, 3, 4 y 5;

-13) incumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013 por la falta de conservación de la documentación requerida a los clientes.

Para arribar a esta decisión, y examinada la información colectada en el marco del procedimiento de supervisión, verificación e inspección *in situ* del cumplimiento del régimen bajo examen, el funcionario actuante expresó los argumentos que se pasan a reseñar. En particular, se destacó, en cuanto aquí interesa, lo siguiente:

a) Respecto de la falta de registración en el SRO de la U.I.F. del oficial de cumplimiento, la Instrucción destacó que este incumplimiento fue constatado por los inspectores de la Unidad y volcado en su informe técnico de fs. 247/254 en los siguientes términos: “Según constancia de registración en el Administrador SRO (fs. 2/3), la Sra. María Natalia González Gordillo es el oficial de cumplimiento designado. Del acta de directorio N° 25 de fecha 20.04.2015, aportada por el sujeto obligado se desprende que el oficial de cumplimiento designado ante esta U.I.F., es el Sr. Juan Ignacio Munafo (fs. 15). Tras esta discrepancia, en el marco de la inspección *in situ*, se lo intimó a que regularice dicha situación (situación), según consta en el acta de fecha 29.04.2017 a fojas 5. Constatándose que al día de la fecha dicha irregularidad no fue subsanada (fs. 240/ 241), circunstancia que verifica el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° inciso b) y artículo 6° de la Resolución U.I.F. N° 489/2013 y Resolución U.I.F. N° 50/2011”.

Asimismo, se puso de resalto que la instrucción había reseñado la normativa aplicable y había ponderado el descargo presentado por los sumariados.

En este sentido, se postuló que “...los propios sumariados sostuvieron que el oficial de cumplimiento era otra persona que la que figuraba en el SRO. Respecto de los argumentos de los sumariados relativos a que en definitiva contaban con un oficial de cumplimiento y que la circunstancia de no haberlo inscripto en el SRO resultaba un mero error formal, no puede prosperar, con lo cual no ha logrado desvirtuar el incumplimiento constatado” (v. fs. 966 vta./967 de las actuaciones administrativas).

Por todo lo expuesto, el Sr. Presidente de la U.I.F. concluyó que, tal como había sido sostenido por la Instrucción, el cargo en análisis se encontraba acreditado, y se sugirió la aplicación de una multa de pesos cien mil (\$100.000).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

b) Con relación a la falta de un Manual de Procedimiento en materia de PLA/FT, se tuvo en cuenta que la Instrucción había recordado que dicha infracción había sido constatada por los inspectores de la Unidad en su informe técnico de fs. 247/254, en los siguientes términos: "... mediante nota de requerimiento obrante a fs. 4, se requirió al supervisado el Manual de Procedimientos para la prevención del Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo, no aportándolo o no contar con el mismo, según surge del acta de constatación obrante a foja 5..." (*vide* fs. 967 vta. de las actuaciones administrativas).

Por lo demás, respecto del Manual acompañado en etapa sumarial, se indicó que la Instrucción había señalado una suma de defectos, al tomar en cuenta que: "...no cuenta con fecha cierta, no consigna su fecha de elaboración, no se acompañó un acta de asamblea que apruebe dicho manual, ni los sumariados especificaron desde cuando lo tenían. Sumado a ello, el responsable que atendió el requerimiento de la U.I.F. manifestó claramente que no contaban con un manual de procedimientos, dando conformidad de sus dichos mediante la inserción de su firma en el acta de constatación, conforme surge de fs. 5. En este sentido, el argumento de los sumariados en cuanto a que la persona que se encontraba presente en la supervisión desconocía que contaban con un manual de procedimientos, no puede prosperar. Además de ello, el manual debía estar disponible, conforme lo dispone la normativa dictada por la U.I.F."

En virtud de lo expuesto, se concluyó que el cargo respectivo se encontraba probado, y que el proceder observado constituía una infracción a lo dispuesto en los artículos 3º inciso a) y 4º de la Resolución U.I.F. nº 489/2013, razón por lo cual se sugirió la aplicación de una multa de pesos cien mil (\$100.000).

c) En lo atinente a la falta de implementación de un sistema de auditoría interna anual en materia de PLA/FT, se puso de resalto otras falencias de gestión, ya que: "... mediante la Nota de Requerimiento N° 40 del 10 de marzo de 2017, la U.I.F. le solicitó al Sujeto Obligado la presentación de los informes de auditoría interna en la materia de PLA/FT, y que en el acta de constatación obrante a fs. 5/7 se asentó que el apoderado del Sujeto Obligado manifestó que no contaban con auditorías internas" (*vide* fs. 968 de las actuaciones administrativas).

En igual sentido, se indicó que los argumentos de los sumariados para resistir dicha imputación no podían prosperar, pues "[l]a norma que prevé la obligación de realizar auditorías no distingue por el tamaño del sujeto obligado, y en este sentido, no existe ningún motivo para eximirlos de realizarlas. Es decir que, es una interpretación errónea de la norma por parte de los sumariados, que es clara al respecto. Asimismo, los sumariados no acompañaron ningún tipo de informe de auditoría en etapa



sumarial, con lo cual sus dichos son meras afirmaciones, que no logran desvirtuar el cargo endilgado...”.

Por último, se refirió que: “...las auditorias tienen por objeto evaluar los procesos de PLA/FT, con lo cual las manifestaciones de los sumariados en cuanto a que sólo necesitaban controlar a sus empleados y a las operaciones que se realizaban, no guarda relación con la dispuesto en la norma. A mayor abundamiento, cabe señalar que, en oportunidad de la visita, se manifestó que no contaban con auditorias, conforme surge del acta de constatación” (*vide* fs. 968 vta. de las actuaciones administrativas).

En suma, se tuvo por acreditado el incumplimiento referido y se aconsejó a su respecto, la aplicación de una multa de pesos cien mil (\$100.000).

d) En cuanto al cargo relativo a la falta de implementación de capacitaciones para el personal en materia de PLA/FT, se hizo saber que la Instrucción había indicado que dicha infracción había sido constatada por los inspectores de la Unidad en su informe técnico de fs. 247/254 en los siguientes términos: “...A fs. 5 obra acta de constatación en la cual se vislumbra que el supervisado manifestó no contar con un Programa de capacitación en materia de PLA/FT para los períodos requeridos, tampoco cuenta con constancia de capacitación externa en la materia, ni listados con detalle de asistencia a capacitaciones internas” (*vide* fs. 969 de las actuaciones administrativas).

Por lo demás, se añadió que “...mediante Nota de Requerimiento N° 40 del 10 de marzo de 2017, la U.I.F. le solicitó al Sujeto Obligado la presentación del programa de capacitación en materia de PLA/FT correspondientes a los años 2015 y 2016, capacitaciones externas, detalle de asistencias a capacitaciones internas y/o cualquier otra actividad de capacitación en la materia (v. fs. 4), y que en el acta de constatación obrante a fs. 5/7 se asentó que el apoderado del Sujeto Obligado manifestó no contar con capacitaciones en materia de PLA/FT. El argumento de los sumariados en cuanto que el Sr. Munafo capacitaba a sus empleados no puede prosperar. En este sentido, cabe señalar que los mismos no acompañaron ninguna documentación que acredite sus dichos, resultando una mera afirmación que no alcanza a desvirtuar el cargo endilgado. Asimismo, cabe destacar que los sumariados no especificaron el contenido de las supuestas capacitaciones que brindaban, ni los temas que abarcaban. Es decir que, las explicaciones al respecto, resultan insuficientes...” (cfr. fs. 969 y vta. de las actuaciones administrativas).

En suma, se estimó que la referida infracción se encontraba constatada y, en consecuencia, se consideró adecuado la aplicación por dicha causal de una multa de pesos cien mil (\$100.000).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

e) Respecto del cargo relativo a las deficiencias detectadas en la implementación de las políticas de identificación y conocimiento del cliente, el sumario revelaba diversas falencias y transgresiones normativas.

En tal sentido, el Sr. Presidente de la U.I.F. puntualizó que se había indicado que "... de la documentación aportada por el mismo (en referencia al sujeto obligado) a lo largo de la supervisión, no se logró obtener información fidedigna de las operaciones realizadas con sus clientes, como así tampoco datos identificatorios de los mismos (...) los agentes supervisores señalaron en el Informe Final de Supervisión que habiéndole requerido al Sujeto Obligado que aporte una base de datos de las operaciones realizadas en el período 2015 a la fecha de la verificación, el mismo manifestó que no contaba con una base de datos informatizada que le permitiera consolidar las operaciones realizadas con sus clientes, implicando esto un entorpecimiento en la selección de la muestra de clientes (...) a su vez, si bien el Sujeto Obligado proporcionó las impresiones del Libro IVA Ventas desde enero del 2015 a febrero de 2017, la Dirección de Supervisión indicó que de la documentación aportada no pudo determinarse el valor final de las ventas, por lo que se le solicitó a la supervisada que entregue los elementos que así lo acrediten..." (cfr. fs. 970 de las actuaciones administrativas).

También se destacó que "...los sumariados no acompañaron ningún tipo de documentación que pruebe que llevaban adelante una política de identificación y conocimiento de sus clientes. Asimismo, quedo acreditada la dificultad que tuvieron los agentes de la UIF en recabar la información y documentación necesaria a fin de evaluar la política de identificación y conocimiento del cliente, cuestión que demuestra que efectivamente, como señaló la Dirección de Supervisión en su informe final, el Sujeto Obligado no contaba con una política de identificación de sus clientes".

Por todo lo expuesto, y tal como sostuvo la Instrucción, en el acto sancionatorio de marras se concluyó que el cargo en análisis se hallaba acreditado y, se sugirió la aplicación de una multa de pesos cien mil (\$100.000).

f) Con referencia a la imputación basada en la falta de determinación del perfil transaccional de los clientes, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la resolución U.I.F. nº 489/2013, se recordó que la instrucción había sugerido la aplicación de una multa de pesos cien mil (\$100.000), al haber tenido por constatada la falta en cuestión.

Sobre el punto, se puso de resalto que la Instrucción había señalado que los inspectores de la Unidad habían constatado el incumplimiento, conforme lo expresado en el informe obrante a fs. 247/254. En efecto se indicó que "... Tal como surge del acta de constatación obrante a fs. 99, el supervisado manifestó [no] haber



elaborado el perfil de sus clientes, alegando que él conoce a las personas con las que opera, así como también las actividades que realizan”.

Asimismo, se puso de resalto que la infracción había quedado constatada, conforme lo expresado en el acta de constatación de fecha 30 de marzo de 2017, en donde los agentes supervisores habían expresado que “consultado al supervisado SI confecciona el perfil del cliente conforma la normativa aplicable el mismo manifiesta [no] realizarlo, manifestando que conoce a sus clientes con los que opera, como así también las actividades que realizan los mismos” (cfr. fs. 970 vta. de las actuaciones administrativas).

Por lo demás, respecto de las defensas opuestas por los sumariados acerca del cargo en cuestión (concretamente, que conocían personalmente a sus clientes), se entendió que carecían de peso para exculpar a los encartados.

Al respecto, se sopesó que la Instrucción había afirmado que dicha defensa “... no puede prosperar. Tal como se consignó en el informe final de supervisión, la falta de conformación de legajos con su correspondiente perfil deja de manifiesto la ausencia de controles básicos. A fin de dar cabal cumplimiento con esta obligación, resulta una condición imprescindible conocer todos los aspectos que permitan confeccionar el perfil de sus clientes y así poder evitar que las operaciones que realicen puedan tener vinculación con el desarrollo de actividades ilícitas” (cfr. fs. 971 de las actuaciones administrativas).

En definitiva, y de modo coincidente con lo sostenido por la Instrucción, se concluyó que el cargo en análisis se encontraba acreditado.

g) Respecto del incumplimiento por falta de requerimiento de la declaración jurada de la condición de PEP de los clientes, se recordó que la Instrucción había tenido por acreditados dichos incumplimientos.

Con relación a tales cargos, el Sr. Presidente de la Unidad postuló que, conforme surgía de los términos del acta del 30 de marzo de 2017, “los agentes actuantes le consultan al supervisado si solicitan la DDJJ de PEP, el supervisado manifiesta que dicha declaración se realiza en la escribanía con la que trabajan E.P., con excepción si el cliente quiere trabajar con su propia escribanía, no aplicando ningún otro procedimiento para definir si el cliente reviste calidad de PEP, conforme la resolución U.I.F. N° 11/2011” (cfr. fs. 971 vta. de las actuaciones administrativas).

Por otra parte, en cuanto a la defensa de los sumariados relativa a que conocían personalmente a sus clientes, se recordó que la Instrucción había sostenido que “... ello no puede prosperar. Tal como se consignó en el informe final de supervisión, el sujeto obligado debe constatar personalmente la calidad de PEP de sus





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

clientes a través de la firma de una DDJJ, no pudiendo delegar esa tarea en un tercero...” (cfr. fs. 971 vta. de las actuaciones administrativas).

Bajo tales lineamientos, se interpretó que, conforme lo sostenía la Instrucción, se encontraba constituida la infracción a lo dispuesto en la Resolución U.I.F. n° 11/2011, y se sugirió la aplicación, por este cargo, de una multa de pesos cien mil (\$100.000).

h) En punto al cargo imputado por falta de constatación del listado de terroristas y organizaciones terroristas publicado por el Consejo de Seguridad de la ONU, se recordó que la Instrucción había sugerido por dicha falta de cumplimiento una multa de pesos cien mil (\$ 100.000).

Al respecto, se subrayó que la Instrucción había tenido por constatado el incumplimiento, conforme surgía de los términos del acta del 30 de marzo de 2017. En efecto, se manifestó que “...se le consulta al supervisado si verifica que los clientes no se encuentren incluidos en el listado de terroristas y/u organizaciones terroristas de acuerdo a lo establecido en la Resolución U.I.F. N° 29/2013 a lo cual el supervisado manifestó no realizar dicha consulta...”. (cfr. fs. 972 de las actuaciones administrativas).

En lo atinente a la defensa opuesta por los sumariados por dicho aspecto, relativa a que conocían personalmente a sus clientes, fue desestimada, teniéndose en cuenta que: “ello no puede prosperar. Los sujetos obligados deben dejar asentado que han verificado correctamente si sus clientes se encuentran o no incluidos en los listados terroristas...” (v. fs. 972 de las actuaciones administrativas).

De esta manera, se concluyó que el cargo imputado se encontraba acreditado.

i) Respecto del cargo relativo a la falta de implementación de procedimientos especiales de identificación de los clientes, previstos en el artículo 17, incisos c), d), y f) de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, se indicó que la Instrucción había constatado dicho incumplimiento y había sugerido, en consecuencia, la aplicación de la sanción de multa de pesos cien mil (\$100.000).

Al respecto, se observó que, en el acta del 30 de marzo de 2017, surgía la inobservancia total de dicha carga reglamentaria. Ello así, toda vez que los inspectores en dicha acta habían manifestado que: “...los agentes actuantes le consultan que mecanismos utilizan para identificar que las personas físicas utilicen a personas de existencia ideal como método para realizar sus operaciones, conforme inciso c) de artículo 170 de la normativa aplicable, al cual manifiesta no aplicar ningún



procedimiento a dicho efecto. Seguidamente se le consulta si utilizan alguna medida para evitar operar con personas de existencia ideal que suelen desarrollar una actividad comercial o una actividad sin fines de lucro, conforme inciso d) de artículo 17 de la citada resolución, manifestando no realizar medida alguna. Consultado, si de operar con otros sujetos obligados como clientes, que procedimientos reforzados utilizan, el sujeto obligado dice que no realizan procedimiento alguno...” (sic, fs. 973 del expediente administrativo).

En suma, en el acto administrativo sancionatorio aquí cuestionado, y en sentido coincidente con la Instrucción, se concluyó que el cargo en análisis también se encontraba acreditado.

j) En lo atinente a la falta de confección de los legajos de los clientes, se puso de resalto que la Instrucción también había tenido por acreditado dicho incumplimiento.

En efecto, la Instrucción destacó que: “... durante la supervisión se le requirió al Sujeto Obligado que aporte una base de datos de las operaciones realizada en el período 2015 a la fecha de supervisión, a lo que se respondió que no contaban con una base de operaciones informatizada que le permita consolidar las operaciones que realiza con sus clientes. Asimismo, cabe destacar que al requerimiento de los boletos de compraventa, se constató que no los tenían en su poder y en lugar de ello aportaron formulario “CETA” de aplicativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Todo ello, conforme surge del acta de constatación de fecha 30 de marzo de 2017...” (v. fs. 973 y vta. de las actuaciones administrativas).

En suma, se tuvo por constatada la infracción descrita, a partir de lo cual se sugirió a su respecto la aplicación de una multa de pesos cien mil (\$100.000).

k) Con relación a la falta de implementación de herramientas tecnológicas, de un sistema de alertas y de un registro de operaciones inusuales y de las operaciones sospechosas reportadas, se señaló que la Instrucción había sostenido que estas infracciones habían sido constatadas por los agentes supervisores de la U.I.F., y se propició la aplicación de una multa de pesos cien mil (\$100.000).

En concreto, se repasaron las constancias de las que surgía que no habían sido implementados tales sistemas, indicándose que la Instrucción había sostenido que “...ha sido constatados por los agentes de la U.I.F. que al momento de realizase la verificación, el Sujeto Obligado no poseía un sistema que le permita consolidar electrónicamente las operaciones efectuadas a efecto de su monitoreo en materia de PLA/FT. Ello, ya que mediante Nota de Requerimiento N° 40 del 10 de marzo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

de 2017, la U.I.F. le solicitó al sujeto obligado que presente una nota detallando de manera pormenorizada los sistemas informativos de monitoreo implementados (v. fs. 4 vta.), y que a fs. 24 obra una nota del Sujeto Obligado en la que manifestó que hasta el momento no cuentan con un sistema informático de monitores, a fin de que le surjan alertas que le permitan cumplir con los sistemas de control y PLA/FT. Asimismo, cabe destacar que mediante la misma Nota de Requerimiento se le solicitó al Sujeto Obligado un registro de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas, y que en el acta de constatación a fs. 5/7 se asentó que el apoderado manifestó que no contaban con un registro de análisis y gestión de riesgo. Respecto de la implementación de herramientas tecnológicas, cabe señalar que los propios sumariados manifestaron que no contaban con las mismas porque les resultaba innecesario...” (v. fs. 974 y vta. de las actuaciones administrativas).

1) En lo atinente a la falta de reporte de operaciones sospechosas (ROS), se indicó que la Instrucción había tenido por constadas las respectivas infracciones, conforme surgía del informe de fs. 247/254.

En efecto, se puso de resalto que, en la Resolución de Instrucción, se había expresado que las falencias y faltas eran objetivas, afirmándose que: “... el Sujeto Obligado no ha identificado correctamente a sus clientes solicitando la documentación necesaria al efecto ni ha implementado procedimiento que impliquen un correcto análisis de operaciones inusuales, generando en consecuencia la ausencia de reportes de operaciones sospechosas...” (v. fs. 974 vta./975 de las actuaciones administrativas).

Así también se señaló que “... conforme surge del Acta de Constatación de fecha 30/03/2017 obrante a fs. 97/103, los agentes supervisores le informaron al Sujeto Obligado que de acuerdo a los montos operados en efectivo, su frecuencia y habitualidad, la falta de documentación de respaldo de las operaciones, como así también la ausencia total de una base de datos informatizada que permita conocer todas sus operaciones, deja entrever el “ALTO RIESGO” de su negocio. Asimismo, le indicaron las circunstancias que debían ser especialmente valoradas a fin de merituar si las operaciones efectuadas por sus clientes resultaban inusuales, y que debían reportarlas ante esta Unidad de Información Financiera de considerarlas sospechosas...” (v. fs. 975 de las actuaciones administrativas).

Por otra parte, se manifestó que la Dirección de Supervisión en su Informe Final se había referido a las particularidades detectadas respecto de los clientes con los cuales el Sujeto Obligado operaba, conforme el siguiente detalle:



“Operación N° 1: Jim Automóviles S.A. le facturó al Sr. Juan Ignacio Munafó, durante enero de 2017, la suma de [pesos un millón seiscientos cuarenta mil] (\$1.640.000), por la compra de tres vehículos no identificando en primer lugar los beneficios finales, segundo no le solicitó la declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de PLA/FT, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante esta U.I.F., como así tampoco aplicó procedimientos reforzados al operar con otro sujeto obligado, conforme lo estipula el inciso f) del artículo 17° de la normativa aplicables, circunstancia que se acredita con la ausencia de registración ante esta Unidad. Sumado a esto, tampoco solicitó el origen de los fondos del Sr. Munafó Juan Ignacio, recalcando que en dicho aeta operaba como persona física que realiza la misma actividad y no como socio director de la supervisada.

Operación N° 2: El cliente A.I.S.A., en julio de 2015 compró una Land Rover Sport V8, por la suma de \$1.667.500.-, en agosto de 2016 la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) le revocó la autorización para operar, atento que carecía de respaldo de capital exigido por la normativa vigente. A partir de una supervisión in situ realizada por SSN, detectó sobre los EECC al 31.12.2015 la inexistencia de saldos bancarios declarados por 203,5 millones de pesos y el ocultamiento de 5000 juicios, determinando que el patrimonio neto negativos de 760 millones de pesos y un déficit de capital de 1.400 millones de pesos.

Operación N° 3: Asimismo el cliente B.G.R., compró en febrero del año 2015 un Porsche todo terreno Cayenne por la suma de 1.400.000.-, conocido en el año 2012 por ser titular de una Ferrari F430 que hasta el 6.01.2011, había estado a nombre de la empresa M., constructora cuyo propietario el Sr. S.S. a través del cual se sospechaba que se desviaron millonarios fondos de terceras personas.

Operación N° 4: El cliente H.W.A., compró en septiembre del 2015 un Mercedes Benz C2520 Coupe por la suma de \$550.000 (modelo 2012) y en marzo del 2016 compró un Mercedes Benz SLK200 (modelo 2011) por la suma de \$670.000. El cliente se encuentra registrado ante la AFIP como monotributista categoría C, situación que tuvo que alertar a JIM AUTOMÓVILES si se hubiese realizado el perfil del cliente.

Operación N° 5: En noviembre del año 2015, el cliente M. C. S.R.L. compró un BMW modelo 2013 por la suma de \$750.000. Dicha sociedad pertenece a un empresario que estaba siendo investigado en una causa de enriquecimiento ilícito ...” (véase fs. 975/976 de las actuaciones administrativas).

En virtud de ello, se tuvo en cuenta que la Dirección de Supervisión había indicado que “...se puede ratificar que Jim Automóviles S.A. realiza operaciones de compra/ venta de autos de alta gama, operando en efectivo con sus clientes y no dejando registro alguno de sus operaciones a fin de poder constatar el giro normal del negocio, situación que genera un alto riesgo en lavado de activos...” (véase, fs. 976 de las actuaciones administrativas).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

En síntesis, se hizo hincapié en que la Instrucción detectó la falta de reporte de operaciones sospechosas, y a tal fin se señaló que: “[h]a sido constatado por los agentes de la U.I.F. que el Sujeto Obligado no reportó la Operación N° 1, la Operación N° 2, la Operación N° 3, la Operación N° 4 y la Operación N° 5, que revestían el carácter de sospechosas. Así cabe destacar que el Sujeto Obligado no contaba con un sistema de PLA/FT, no contaba con un Manual de Procedimientos, no realizaba auditorías, no realizaba capacitaciones, no tenía legajos de sus clientes, no trazaba el perfil de sus clientes, no constataba la condición de PEP ni de terrorista de sus clientes, no contaba con un registro de gestión de riesgo y de inusualidades, no contaba con herramientas tecnológicas, con lo cual, nunca pudo advertir ni detectar las operaciones sospechosas...” (sic, fs. 976 vta. de las actuaciones administrativas).

Asimismo, se reseñó que la Instrucción había manifestado que “[l]os elementos de sospecha consignados en la Resolución de Instrucción respecto a las operaciones no reportadas son más que suficientes para advertir que resultaban operaciones inusuales y sospechosas. Los argumentos de los sumariados relativos a que no se trataban de compraventas ya que JIM sólo intervenía como intermediario, que las personas involucradas en las operaciones tenían buena reputación y que desconocían la existencia de causas penales en curso, resultan meras afirmaciones, no pudiendo excusarse de su deber de reportar por las circunstancias invocadas...” (v. fs. 976 vta. de las actuaciones administrativas).

En cuanto al monto de la sanción, se indicó que la Instrucción había sugerido aplicar “...una multa de una vez el valor de las operaciones involucradas, de conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 24 de la Ley N° 25.246...” (v. fs. 976 vta./977 de las actuaciones administrativas).

En suma, se concluyó que el cargo se encontraba probado y que constituía una infracción a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) de la Ley n° 25.246 y sus modificatorias y en el artículo 26 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013.

m) Por último, con relación al incumplimiento de la obligación de conservar la documentación requerida a los clientes, se recordó que la Instrucción había tenido por constatada la referida inobservancia normativa y, en consecuencia, había sugerido la aplicación de una multa de pesos cien mil (\$100.000).

En este aspecto, se puso de resalto que se había hecho alusión a la Resolución que dispuso el inicio del sumario, en la cual se había expresado – con fundamento en lo informado por los supervisores– que el representante legal de Jim Automóviles S.A. “... había manifestado que no confeccionaban



legajos de sus clientes, que sólo recababan de ellos la información necesario para ser presentada ante el Registro de Propiedad Automotor, y que no conservaban copia alguna de dicha documentación” (cfr. fs. 977 vta. de las actuaciones administrativas).

Asimismo, se indicó que la Instrucción había referido que, en oportunidad de presentar su descargo, los sumariados efectuaron alegaciones insuficientes, en tanto: “... no esgrimieron ninguna defensa puntual respecto del cargo endilgado. En forma genérica, los mismos sostuvieron que eran una empreña de tamaño pequeño, que conocían a sus clientes y todas las operaciones que estos realizaban...” (cfr. fs. 977 vta. de las actuaciones administrativas).

Por lo demás, se añadió que “[e]n orden a los antecedentes del Sumarios, lo manifestado por los sumariados y la normativa aplicable, esta Instrucción concluye lo siguiente: Ha sido constatado por los agentes de la U.I.F. que al momento de realizarse la verificación, el Sujeto Obligado no conservaba la documentación que dispone el artículo 24 de la Resolución U.I.F. N° 489/2013. Ello, conforme surge del acta de constatación de fecha 29 de marzo de 2017 obrante a fs. 5/7 y el acta de constatación de fecha 30 de marzo de 2017 obrante a fs. 97/103...” (cfr. fs. 977 vta. de las actuaciones administrativas).

En suma, como corolario de estas circunstancias, se tuvo por acreditada la infracción a lo dispuesto por el artículo 24 de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, sobre conservación de documentación.

Una vez apuntadas las consideraciones referidas, el Sr. Presidente de la U.I.F., entre otras cuestiones, postuló que el marco normativo aplicable describía conductas de cumplimiento exigible, siendo su incumplimiento punible, sin evaluar si ha existido dolo, culpa o cualquier otra cuestión vinculada a algún factor de atribución subjetivo. Agregó que tampoco se evaluaba la presencia de errores involuntarios y, menos aún, el desconocimiento de la legislación vigente.

Por otra parte, en lo atinente a la invocación de la inconstitucionalidad de la Resolución U.I.F. n° 111/2012, el Sr. Presidente apeló al criterio administrativo usual en la materia, al recordar que “...por el principio de la división de poderes, la declaración de inconstitucionalidad resulta competencia del Poder Judicial (conforme Dictámenes PTN Nros. 240:158; 298:206; entre otros). Asimismo, por el principio de inderogabilidad singular del reglamento y la presunción de legalidad de los actos emanados de la Administración Pública, no puede esta Instrucción apartarse de lo establecido en la Res. U.I.F. N° 111/2012, máxime cuando no se ve afectado el derecho al debido proceso adjetivo siendo que en los puntos III y IV de la presente se proveen los medios de prueba ofrecidos por los sumariados dentro de las previsiones





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

contenidas en la Res. U.I.F. Nº 111/2012...” (v. fs. 981 de las actuaciones administrativas).

Paralelamente, el Sr. Presidente de la U.I.F. dispuso que, con relación al planteo intentado por los sumariados respecto a que Jim Automóviles S.A. no sería sujeto obligado, debía estarse a lo resuelto en la Resolución U.I.F. nº 3 del 20 de enero de 2021, en la cual se había rechazado el referido planteo, en virtud de los fundamentos allí expuestos –a los que se remitió por motivos de brevedad–.

En igual sentido, señaló que, según la constancia de fs. 2, fue el propio sujeto obligado el que había procedido a la registración ante el SRO de la U.I.F. con fecha 20 de noviembre de 2014, declarando como tipo de sujeto: “31/2012 – Personas físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus (...)”; por lo tanto, estimó que en dicha oportunidad la sociedad había asumido el carácter de sujeto obligado (cfr. fs. 981 vta. de las actuaciones administrativas).

En lo atinente a la responsabilidad que le cabría a los sumariados, el Sr. Presidente de la U.I.F. indicó que mediante la Resolución U.I.F. nº 133/2017 se había ordenado la instrucción de las actuaciones sumariales al sujeto obligado, a los integrantes de sus órganos de administración y al oficial de cumplimiento, a fin de que ejercieran su derecho de explicitar cuál había sido su conducta en la presunta comisión de los incumplimientos endilgados y, en caso de corresponder, liberarse de responsabilidad.

Sentado ello, la autoridad de la U.I.F. dispuso que la responsabilidad de los miembros del órgano de administración por las omisiones imputadas surgía en forma clara ya que, debido a sus cargos al momento de los hechos investigados en las actuaciones, no podían alegar válidamente un desconocimiento de los hechos infraccionales que habían motivado el sumario.

En efecto, razonó que el ejercicio de tales funciones directivas determinaba que aquéllos debían tomar la correspondiente intervención, no sólo para evitar que los desvíos normativos se produjeran, sino, incluso, a fin de adoptar medidas para reencauzar la situación y subsanar esos eventuales apartamientos. En suma, postuló que las deficiencias organizativas que habían ocasionado tal estado de cosas involucraban necesariamente a quienes ostentaban poder decisorio respecto de la organización de la entidad.



En lo que respecta a las sanciones a aplicar, se recordó que en el inciso 1° del artículo 24 de la Ley n° 25.246 se establecía que la persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible incumpla alguna de las obligaciones ante la U.I.F., sería pasible de sanción de multa. De igual modo, se destacó que el artículo 20 *bis* de la Ley n° 25.246 y sus modificatorias establece que la totalidad de los integrantes del órgano de administración (incluido el oficial de cumplimiento) son responsables solidaria e ilimitadamente por el deber de informar previsto en el artículo 21 de la referida ley.

En el acto sancionatorio reseñado también se destacó que la finalidad esencial de las sanciones que aplica la U.I.F. consiste en la prevención y disuasión de conductas reprochables, y que ello tiende a evitar la reiteración de los incumplimientos por parte de los sumariados.

Asimismo, se señaló que, en el caso bajo examen, era ineludible remitirse a la Recomendación 10 del Grupo de Acción Financiera Internacional, la cual establecía como estándar internacional la obligatoriedad de tomar medidas de Debida Diligencia del Cliente, conforme las obligaciones que determine cada país.

Adicionalmente, se recordó que dicha Recomendación indicaba que los Sujetos Obligados deben realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar que las transacciones que se realicen sean consistentes con el conocimiento que posee sobre el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los fondos.

En otro orden de cuestiones, en lo atinente a los montos de las sanciones de multa sugeridos por la Instrucción, el Sr. Presidente de la U.I.F. sostuvo que resultaban coincidentes con la normativa aplicable al caso, ya que respetaban el tope mínimo y máximo fijados en los incisos 1° y 3° del artículo 24 de la Ley n° 25.246.

Bajo dicha comprensión, el presidente de la Unidad señaló que en el Informe Final se había puesto de resalto que resultaba imprescindible enunciar cuáles habían sido, en el caso objeto de análisis, los factores de ponderación que habían servido de guía para la cuantificación de las sanciones previstas en el capítulo IV de la Ley n° 25.246 y sus modificatorias, a fin de otorgar razonabilidad al ejercicio de dicha facultad por parte de la U.I.F..





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

En este sentido, se tuvo en cuenta como tal, la naturaleza de cada uno de los incumplimientos detectados, la cantidad de infracciones cometidas que demostraban un elevado riesgo para el sistema PLA/FT, y la insistencia por parte de los sumariados en la instancia sumarial respecto a que no debían cumplir con las obligaciones en materia PLA/FT.

Por otra parte, a los efectos de fijar el *quantum* de la sanción, también se ponderó que, conforme se desprendía de las constancias de autos, las operaciones en las que había intervenido Jim Automóviles S.A. involucraban vehículos de alta gama, por lo que, todos y cada uno de los incumplimientos a la normativa que comprendía la política de conocimiento e identificación del cliente –detallada en los cargos analizados– conllevaba cada uno de ellos y en conjunto, un elevado riesgo para el sistema preventivo de LA / FT.

Con base en las consideraciones expresadas, la autoridad administrativa concluyó que compartía las conclusiones arribadas por la Instrucción en su Informe Final y encontraba razonable, eficaz, proporcional y disuasiva la aplicación de las sanciones de multa indicadas, en virtud de los incumplimientos acreditados.

VII.- Que, con el objeto de facilitar el adecuado conocimiento de las cuestiones debatidas en el pleito, resulta oportuno también efectuar una reseña del marco normativo sobre el cual se sustentó el caso *sub examine*.

En esta línea, cabe recordar que por medio del dictado de la Ley n° 25.246 (en su redacción vigente al momento de los hechos que dieron sustento a la presente causa), fue creada la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), encomendándole ser la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos y el de financiación del terrorismo (cfr. artículos 5° y 6° de la Ley n° 25.246).

En el cumplimiento de tal misión, y según el artículo 13 de la ley bajo referencia, la U.I.F. resulta competente para recibir, solicitar y archivar las informaciones a que refiere el artículo 21 (al que se hará referencia *infra*), que podrán ser utilizadas en el marco de una investigación en curso (conf. su numeral 1°) y para disponer y dirigir el análisis de los actos y operaciones que, según lo dispuesto en la ley, pudieran configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo y, en su caso, poner los elementos de



convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público para el ejercicio de las acciones pertinentes (conf. su numeral 2°).

A su turno, en el artículo 14 de la referida norma se le otorgaron diversas facultades, entre las cuales se encuentran, en cuanto aquí importa:

- solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estimara útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley (conf. su inciso 1°);

- emitir directivas e instrucciones a cumplir e implementar por los sujetos obligados, previa consulta con los organismos específicos de control (cfr. inc. 10);

- disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas enumeradas en el artículo 20 de la ley, estableciendo los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección *in situ* para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las potestades ya señaladas (cfr. inc. 7°, primer párrafo, del art. 14 de la Ley n° 25.246 y art. 14 del decreto n° 290/07); el señalado mecanismo de revisión dependería directamente del Presidente de la U.I.F., quien dispondría la sustanciación del procedimiento correspondiente (conf. segundo y tercer párrafo del inciso 7° del artículo 14 de la Ley n° 25.246);

- aplicar las sanciones previstas en el Capítulo IV de la norma bajo examen (cfr. inciso 8° del artículo 14 de la Ley n° 25.246).

Por otro lado, se impusieron una serie de deberes de colaboración con la autoridad de aplicación, que recaen sobre ciertos sujetos –conocidos como los “Sujetos Obligados”–, entre los que figuran, en lo que importa a estos autos, las personas humanas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos (conf. inciso 21 del artículo 20 de la Ley n° 25.246 –en su redacción al momento de los hechos que dieron origen a la presente, conf. artículo 25 de la Ley n° 26.683–).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

Es así como, respecto de la naturaleza y alcances de dichos deberes, vale hacer referencia a los siguientes:

(i) El deber de informar consiste en la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la U.I.F. la documentación recabada de sus clientes, en cumplimiento de lo establecido en el inciso a) del artículo 21 de la ley, y anoticiarla de las conductas o actividades de las personas humanas o jurídicas con las que interactúen, de las cuales pudiera inferirse la existencia de una situación atípica, que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo (conf. primer párrafo del artículo 20 *bis*, de la Ley nº 25.246).

En el supuesto en el cual el Sujeto Obligado fuera una persona jurídica regularmente constituida, se establece la designación de un Oficial de Cumplimiento por parte del órgano de administración, cuya función radica en formalizar las presentaciones a efectuar en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directivas e instrucciones emitidas en consecuencia; no obstante lo cual, la responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 resulta solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración (conf. cuarto párrafo del artículo 20 *bis* de la Ley nº 25.246).

(ii) Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente la identidad de los mismos, tanto como su personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipulase, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto; pudiendo obviarse esta obligación cuando los importes fueran inferiores al mínimo que estableciera la circular respectiva; información que debe archivar por el término y según las formas que la U.I.F. establezca (ver inciso a, del artículo 21 de la referida ley).

(iii) Informar cualquier hecho u operación sospechosa, independientemente del monto de la misma; es decir: aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se tratase – como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar–, resultaran inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, fueran ellas realizadas en forma aislada o reiterada (ver inciso b, del artículo 21 de la referida ley).



Por otro lado, en el artículo 21 *bis* se especificó quienes serían considerados clientes (“todas aquellas personas humanas, jurídicas, patrimonios de afectación, u otras estructuras jurídicas, y quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial”) y se estableció una serie de obligaciones a cumplimentar.

Así, se dispuso que se debe cumplir lo siguiente:

a) Identificarlos mediante la información, y en su caso la documentación, que se requiera conforme las normas que dicte la Unidad de Información Financiera y que se pueda obtener de ellos o de fuentes confiables e independientes, que permitan con razonable certeza acreditar la veracidad de su contenido. La tarea comprende la individualización del cliente, el propósito, carácter o naturaleza del vínculo establecido con el sujeto obligado, el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo asociado a éstos y su operatoria. En todos los casos, deberán adoptar medidas razonables desde un enfoque basado en riesgo para identificar a los propietarios, beneficiarios finales y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica, patrimonio de afectación o estructura jurídica, junto con su estructura de titularidad y control. Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia, o exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, deberán adoptar medidas adicionales razonables y proporcionadas, mediante un enfoque basado en riesgo, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes. A tales fines, deberán prestar especial atención, a efectos de evitar que las personas humanas utilicen estructuras jurídicas, como empresas pantalla o patrimonios de afectación, para realizar sus operaciones. En razón de ello, deberán realizar esfuerzos razonables para identificar al beneficiario final. Cuando ello no resulte posible, deberán identificar a quienes integran los órganos de administración y control de la persona jurídica; o en su defecto a aquellas personas humanas que posean facultades de administración y/o disposición, o que ejerzan el control de la persona, estructura jurídica o patrimonio de afectación, aun cuando éste fuera indirecto. Asimismo, deberán adoptar medidas específicas a efectos de disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate un servicio y/o producto con clientes que no han estado físicamente presentes para su identificación; debiendo completar las medidas





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

de verificación en tiempo razonablemente práctico, siempre que los riesgos de lavado de activos y/o financiación del terrorismo se administren con eficacia y resulten esenciales a efectos de no interrumpir el curso normal de la actividad. En todos los casos, deberá determinarse el riesgo del cliente y de la operatoria, implementar medidas idóneas para su mitigación, y establecer reglas de monitoreo y control continuo que resulten proporcionales a éstos; teniendo en consideración un enfoque basado en riesgo. Cuando se tratare de personas expuestas políticamente, deberán adoptarse medidas de debida diligencia intensificadas tendientes a establecer alertas, que permitan tomar medidas oportunas a efectos de detectar posibles desvíos en el perfil del cliente, a fin de mitigar el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo vinculado al riesgo inherente a éste y/o a su operatoria;

b) Determinar el origen y licitud de los fondos.

c) Conservar la información recabada respecto de sus clientes, en forma física o digital, por un plazo mínimo de cinco (5) años; debiendo permitir ésta reconstruir las transacciones realizadas, nacionales o internacionales; y encontrarse a disposición de la Unidad de Información Financiera y/o de las autoridades competentes cuando éstas lo requieran.

d) Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de lavado de activos, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de quince (15) días corridos, contados a partir de la fecha en que el sujeto obligado concluya que la operación reviste tal carácter. La fecha de reporte no podrá superar los ciento cincuenta (150) días corridos contados desde la fecha de la operación sospechosa realizada o tentada.

e) Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de financiación de terrorismo, ante la Unidad de Información Financiera, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto.

A lo que se añadió, en el punto 2 del citado artículo, que los referidos sujetos también deben:

a) Registrarse ante la Unidad de Información Financiera.

b) Documentar los procedimientos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, estableciendo manuales internos que reflejen las tareas a desarrollar, asignando las responsabilidades funcionales que



correspondan, en atención a la estructura del sujeto obligado, y teniendo en cuenta un enfoque basado en riesgo.

c) Designar oficiales de cumplimiento, que serán responsables ante la Unidad de Información Financiera del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente norma y por las reglamentaciones que dicte esa unidad. Las personas designadas deberán integrar el órgano de administración de la entidad. En el caso que el sujeto obligado fuere una persona humana, será considerado éste con tal carácter.

En ejercicio de las aludidas potestades reglamentarias, por Resolución U.I.F. n° 489/2013 –en su redacción vigente al momento de los hechos que originaron la presente causa, esto es, sin la modificación dispuesta por la Resolución U.I.F. n° 117/2019 (B.O. 19/11/2019)–, fueron concretamente establecidas las medidas y procedimientos que las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior, automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados, que deban registrarse ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, deberían observar en orden a prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que interesan al régimen de la Ley n° 25.246 vinculados, como se señaló, con la comisión de los delitos de relativos al lavado de activos y a la financiación del terrorismo (cfr. artículos 1° y 2° de la resolución referida).

Cabe también referir, en cuanto aquí importa, que por medio de la mentada resolución se dispuso que:

– por “clientes” se entendería a todas aquellas personas físicas o jurídicas (titulares registrales) que adquirieran o vendieran los bienes a que se refiere el inciso a) del artículo 1°. Asimismo, se considerarían clientes a las simples asociaciones del artículo 46 del Código Civil y otros entes a los cuales las leyes especiales les acordaran el tratamiento de sujetos de derecho.

Por lo demás, se estableció que la calidad de “cliente” se adquiriría a partir de la exteriorización material de la voluntad de la persona de llevar a cabo una operación de compraventa con el Sujeto Obligado (por ejemplo, por la constitución de una reserva, de una seña, etc.).

Por lo demás, se establecieron como excepciones las siguientes: “b.2.1. Quienes adquieran los bienes a que se refiere el inciso a) precedente mediante





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

la suscripción de planes de ahorro, con sociedades de ahorro cuyo objeto específico sea la adquisición de este tipo de bienes (contempladas como Sujetos Obligados en el artículo 20, inciso 13. de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias); b.2.2. Los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20, inciso 1. de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, cuando adquieran bienes –a que se refiere el inciso a) precedente– destinados a operaciones de leasing que celebren con sus propios clientes”.

Así también se indicó en la norma que las excepciones a que se referían los apartados precedentes se aplicarían a partir del momento en que los Sujetos Obligados (enumerados en el artículo 20, incisos 1. y 13. de la Ley nº 25.246 y sus modificatorias) allí indicados acreditaran los extremos a que se refería el artículo 17 inciso f) de la resolución.

– por “automotores” se entendieron como tales únicamente aquellos tipos de vehículos denominados como: motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior; coupé; microcoupé; sedán 2, 3, 4 ó 5 puertas; rural 2, 3, 4 ó 5 puertas; descapotable; convertible; limusina; todo terreno; familiar o pick up.

– por “Personas Expuestas Políticamente” se entendería a las comprendidas en la Resolución U.I.F. vigente en la materia (cfr. inciso d. del artículo 2º);

– por “operaciones sospechosas”, se entendería a aquellas operaciones tentadas o realizadas, que habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el Sujeto Obligado, no guardaran relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente, o cuando se verificaran dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por el cliente, ocasionando sospecha de lavado de activos; o aun cuando tratándose de operaciones relacionadas con actividades lícitas, existiera sospecha de que estuvieran vinculadas o que fueran a ser utilizadas para la financiación del terrorismo (cfr. inciso g, del artículo 2º).

Por lo demás, y con miras a posibilitar el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 20 *bis*, 21 incisos a) y b) y 21 *bis* de la Ley nº 25.246 y sus modificatorias, se estipuló que los Sujetos Obligados, adopten una política de prevención en materia de Lavado de Activos y



Financiación del Terrorismo, para lo cual deberían cumplir con los siguientes deberes:

- La elaboración de un Manual, que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que deberá observar las particularidades de su actividad conf. literal a.-, de su artículo 3º);
- La designación de un Oficial de Cumplimiento, conforme lo establece el artículo 20 *bis* de la Ley nº 25.246 y sus modificatorias y el artículo 20 del Decreto nº 290/07 y modificatorio (conf. literal b.-, de su artículo 3º);
- La implementación de auditorías periódicas (conf. literal c.-, de su artículo 3º);
- La capacitación del propio Sujeto Obligado, o del personal si se encuentra constituido como persona jurídica (conf. literal d.-, de su artículo 3º);
- La elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas (conf. literal e.-, de su artículo 3º);
- La implementación de una base de datos informatizada que le permita al Sujeto Obligado conocer todas las operaciones que realizan sus clientes (conf. literal f.-, de su artículo 3º);
- La implementación de alertas que permitan cumplir con los sistemas de control y prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (conf. literal g.-, de su artículo 3º).

Además, se previó que los Sujetos Obligados tendrían que implementar un manual de procedimientos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo que debería contemplar, por lo menos, los aspectos allí puntualizados (conf. art. 4º), y se estableció que dicho manual debería estar siempre actualizado y disponible en todas las dependencias de los Sujetos Obligados para todos los empleados, considerando la naturaleza de las tareas que desarrollan y debiendo establecerse mecanismos que permitan constatar la recepción y lectura por parte de estos últimos. Paralelamente, se dispuso que el manual debería permanecer siempre a disposición de la U.I.F. (conf. art. 5º).

Así también, la referida resolución establece la obligación de designar a un Oficial de Cumplimiento (conf. art. 6º).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

Entre varias cuestiones, dispone que “[l]os Sujetos Obligados que se encuentren constituidos como personas jurídicas deberán designar un Oficial de Cumplimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 20 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y en el Decreto Nº 290/07 y su modificatorio. El Oficial de Cumplimiento será responsable de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos en virtud de esta resolución y de formalizar las presentaciones ante la Unidad de Información Financiera. Deberá comunicarse a la Unidad de Información Financiera el nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad, cargo en el órgano de administración, fecha de designación y número de C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.U.I.L. (código único identificación laboral), los números de teléfono, fax, dirección de correo electrónico y lugar de trabajo de dicho Oficial de Cumplimiento. Esta comunicación debe efectuarse de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución U.I.F. Nº 50/11 (o la que en el futuro la complemente, modifique o sustituya) y además, por escrito en la sede de la Unidad de Información Financiera acompañándose toda la documentación de respaldo...”.

Asimismo, se indica que “[e]l Oficial de Cumplimiento deberá constituir domicilio, donde serán válidas todas las notificaciones efectuadas. Una vez que haya cesado en el cargo deberá denunciar el domicilio real, el que deberá mantenerse actualizado durante el plazo de [cinco] (5) años contados desde el cese. Cualquier sustitución que se realice del mismo deberá comunicarse fehacientemente a la Unidad de Información Financiera dentro de los [quince] (15) días de realizada, señalando las causas que dieron lugar al hecho, continuando la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento hasta la notificación de su sucesor a esta Unidad de Información Financiera...”.

Por otra parte, conforme lo dispuesto por el artículo 8º se dispuso que debía preverse un sistema de auditoría interna anual, que tuviera por objeto verificar el cumplimiento efectivo de los procedimientos y políticas de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Se previó en la norma que los resultados que arrojaran los procedimientos de auditoría aplicados deberían ser comunicados anualmente al Oficial de Cumplimiento. En el caso que este último detectara deficiencias en cuanto a la implementación y cumplimiento de las políticas de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, debería adoptar las medidas necesarias para corregirlas.

En su artículo 9º se estableció que los Sujetos Obligados deberían desarrollar un programa de capacitación en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Para el caso que se encuentren constituidos como personas jurídicas, el mismo debería dirigirse a sus empleados.



En cuanto a su contenido, el Programa de Capacitación debía contemplar: a) La difusión de la presente resolución y de sus modificaciones, así como la información sobre técnicas y métodos para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas; y b) La adopción de un plan de capacitación.

Resáltese que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la resolución bajo examen, los Sujetos Obligados debían elaborar y observar una política de identificación y conocimiento del cliente, cuyos contenidos mínimos habrían de ajustarse a lo estipulado en los artículos 20 *bis*, 21 inciso a) y 21 *bis*, de la Ley n° 25.246 y sus modificatorias, el decreto n° 290/07 y modificatorio, y la resolución n° 489/2013.

Específicamente, por el artículo 11 se les encomendó que antes de iniciar la relación comercial o contractual con el cliente, debería identificárselo, cumpliendo con lo dispuesto sobre Personas Expuestas Políticamente, verificando que no se encontrase incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas, de acuerdo con lo establecido en la resolución U.I.F. vigente en la materia (conf. inciso a del artículo 11).

Adicionalmente, para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma allí establecida, se deberá definir el perfil del cliente conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente (conf. inciso b del artículo 11).

Según fue contemplado en el artículo 12 del precepto al que se viene aludiendo, en el caso de que el cliente fuera una persona física, los Sujetos Obligados deberían recabar de manera fehaciente, la siguiente información: a) nombre y apellido completos; b) fecha y lugar de nacimiento; c) nacionalidad; d) sexo; e) tipo y número de documento de identidad que deberá exhibir en original y al que deberá extraérsele una copia; aceptándose como documentos válidos para acreditar la identidad, el Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte; f) CUIL (código único de identificación laboral), CUIT (clave única de identificación tributaria) o CDI (clave de identificación), requisito exigible a extranjeros en caso de corresponder; g) domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal); h) número de teléfono y dirección de correo electrónico; i) declaración jurada indicando estado civil, profesión, oficio, industria o





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

actividad principal que realice; j) declaración jurada indicando expresamente si reviste la calidad de Persona Expuesta Políticamente, de acuerdo con la resolución U.I.F. vigente en la materia (apartado I).

Asimismo, se dispuso que “en el caso de personas físicas que encuadren dentro del supuesto previsto en el punto b) del artículo 11 de la presente resolución, se deberá requerir la información consignada en el apartado I precedente, una declaración jurada indicando expresamente si reviste la calidad de Persona Expuesta Políticamente, de acuerdo con la Resolución U.I.F. vigente en la materia y la documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente, conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente” (apartado II).

De otra parte, mediante el artículo 13, se dispuso cuales datos debían ser requeridos a las personas jurídicas. En efecto, en el caso de que el cliente fuera una persona jurídica, se puso en cabeza de los Sujetos Obligados el deber de recabar de manera fehaciente, por lo menos, la siguiente información: a) denominación o Razón Social; b) fecha y número de inscripción registral; c) CUIT (clave única de identificación tributaria) o CDI (clave de identificación), requisito exigible a Personas Jurídicas extranjeras en caso de corresponder; d) fecha del contrato o escritura de constitución; e) copia del estatuto social actualizado, certificada por escribano público o por el propio Sujeto Obligado; f) domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal); g) número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico, actividad principal realizada; h) copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado; i) datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la persona jurídica, conforme lo prescripto en el punto I del artículo 12 de la disposición que se viene reseñando; y j) titularidad del capital social (actualizada).

De igual modo, se estableció que: “en el caso de personas jurídicas que encuadren dentro del supuesto previsto en el punto b) del artículo 11 de la presente resolución se deberá requerir: a) La información consignada en el apartado I precedente; b) Una declaración jurada en la que se indique la titularidad del capital social (actualizada); c) Una declaración jurada en la que se identifiquen a los Propietarios/Beneficiarios y a las personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica; d) Una declaración jurada en la que se indique expresamente si las personas identificadas en el apartado c) precedente, revisten la

Fecha de firma: 09/04/2024

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#36260739#400694106#20240408195401326

calidad de Persona Expuesta Políticamente, de acuerdo con la Resolución U.I.F. vigente en la materia; e) Las declaraciones juradas a que se refieren los apartados b), c) y d) precedentes podrán ser suscriptas por las autoridades o por los representantes legales de la persona jurídica; f) La documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente, conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente resolución” (apartado II).

También, por medio de la referida resolución se señala que “[l]os Sujetos Obligados deberán recabar de manera fehaciente, como mínimo, en el caso de organismos públicos: a) Copia certificada del acto administrativo de designación del funcionario interviniente; b) Número y tipo de documento de identidad del funcionario que deberá exhibir en original. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad el Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica. Asimismo, deberá informar su número de C.U.I.L. (código único de identificación laboral); c) C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria), domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal) y teléfono de la dependencia en la que el funcionario se desempeña; y d) Domicilio real del funcionario (calle, número, localidad, provincia y código postal)” (conf. artículo 14).

Por lo demás, en el artículo 15 se refiere que se deberá requerir al apoderado, tutor, curador o representante legal la información prescripta en el punto I del artículo 12 de la resolución aquí reseñada y el correspondiente poder del cual se desprenda el carácter invocado, en copia debidamente certificada.

Paralelamente, cabe tener en cuenta que en el artículo 17 de la resolución reseñada se establecieron ciertas obligaciones a cargo de los Sujetos Obligados, entre las cuales cabe citar, en cuanto aquí interesa: “...b) Cumplir con lo dispuesto en la Resolución U.I.F. sobre Personas Expuestas Políticamente, de conformidad con lo establecido en la presente, y verificar que los clientes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas de conformidad con lo prescripto en la Resolución U.I.F. vigente en la materia; c) Prestar atención para evitar que las personas físicas utilicen personas de existencia ideal como un método para realizar sus operaciones; d) Evitar operar con personas de existencia ideal que simulen desarrollar una actividad comercial o una actividad sin fines de lucro; y ... f) Al operar con otros Sujetos Obligados solicitar a los mismos una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante esta Unidad de Información Financiera. En el caso que no se acrediten tales extremos deberán aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas...”.

En lo que concierne al conocimiento del cliente, mediante el artículo 18 de la resolución bajo referencia, la U.I.F. dispuso que tal política debía incluir





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

criterios, medidas y procedimientos que contemplasen al menos la determinación del perfil de cada cliente conforme lo establecido en el artículo 11 (literal a-).

Dicho perfil, según lo dispuesto en el artículo 19 de la resolución que se viene examinando, debía estar basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (ello con base en declaraciones juradas de impuestos; copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra; certificación extendida por contador público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, indicando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma; documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos; documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación), que hubiera proporcionado el propio cliente y en la que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado, que justificara el origen de los fondos involucrados en las operaciones que se realizasen. A tales efectos, debería tenerse en cuenta también el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realizase el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria.

Con relación al legajo del cliente, por medio del artículo 23 de la resolución de referencia, se dispuso que “[e]l Legajo del Cliente deberá contener las constancias del cumplimiento de los requisitos prescriptos en los artículos 10 a 16 (según corresponda) y en su caso 19, de la presente resolución. Asimismo debe incluir todo dato intercambiado entre el cliente y el Sujeto Obligado, a través de medios físicos o electrónicos, y cualquier otra información o elemento que contribuya a reflejar el Perfil del Cliente o que el Sujeto Obligado considere necesario para el debido conocimiento del mismo. Cuando el Legajo de Cliente sea requerido por esta [Unidad de Información Financiera] deberán remitirse las constancias que prueben el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la presente resolución”.

A su vez, el artículo 24 de la referida resolución establece que: “conforme lo establecido por el artículo 20 bis; 21 y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y su decreto reglamentario, los Sujetos Obligados deberán conservar y mantener a disposición de esta Unidad de Información Financiera para que sirva como elemento de prueba en toda investigación en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y permita la reconstrucción de la operatoria la siguiente documentación: a)

Fecha de firma: 09/04/2024

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#36260739#400694106#20240408195401326

Respecto de la identificación y conocimiento del cliente, el legajo y toda la información complementaria que se haya requerido, durante un período mínimo de DIEZ (10) años contados desde la finalización de la operación; b) Respecto de las transacciones u operaciones, los documentos originales o copias certificadas, durante un período mínimo de DIEZ (10) años contados desde la finalización de la operación; c) El registro del análisis de las operaciones inusuales previsto en el artículo 20 de la presente resolución, deberá conservarse por un plazo mínimo de DIEZ (10) años, contados desde la finalización de la operación; y d) Los soportes informáticos relacionados con las operaciones deberán conservarse por un plazo mínimo de DIEZ (10) años contados desde la finalización de la operación a los efectos de la reconstrucción de la operatoria, debiendo el Sujeto Obligado garantizar la lectura y procesamiento de la información digital”.

De igual modo, por imperio de la Resolución U.I.F. n° 489/13 se establece en el artículo 26 que: “[l]os Sujetos Obligados deberán reportar a la Unidad de Información Financiera, conforme lo establecido en los artículos 20 bis, 21 inciso b. y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realizan y el análisis efectuado, consideren sospechosas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo”. A tal fin, en la resolución se enumera una serie de circunstancias – a mero título enunciativo– que deberán ser especialmente valoradas.

Una vez definidos estos deberes, se pasó a reglamentar las consecuencias resultantes del respectivo incumplimiento. Fue así como se previó que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y deberes establecidos en la presente resolución serán pasibles de sanción conforme con el Capítulo IV de la Ley n° 25.246 y sus modificatorias (ver artículo 34 de la resolución U.I.F. n° 489/13).

Finalmente, y en lo atinente a las previsiones legales que dan fundamento a la aplicación de sanciones por infracción al esquema normativo ya descrito, debe referirse que el Capítulo IV de la Ley n° 25.246 contempla las sanciones a aplicar con motivo de las distintas trasgresiones al ordenamiento vigente en la materia.

Así, en lo que al caso atañe, valga recordar que según el artículo 24 (en su redacción vigente al momento de los hechos que dieron origen a la causa), se previó que la persona que actuara como órgano o ejecutor de una persona jurídica o bien la persona de existencia visible que incumpliera alguna de las obligaciones ante la U.I.F., será sancionada con una multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operaciones a los que refiriera la infracción,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

siempre y cuando el hecho no constituyera un delito más grave (conf. su inciso 1°); asimismo, se dispuso que idéntica sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor (conf. su inciso 2°); y que, en el supuesto de que no se pudiera establecer el valor real de los bienes, la multa aplicable habrá de estimarse entre la cantidad de \$10.000 y hasta el máximo de \$100.000 (conf. su inciso 3°).

VIII.- Que, sentado lo expuesto, razones de orden lógico indican que es preciso comenzar con el análisis del planteo de nulidad de las Resoluciones impugnadas, en virtud del alegado vicio en la competencia, en tanto de proceder la referida tesitura, en vista de su prelación lógica, se tornaría inoficioso el abordaje de los demás planteos traídos a esta instancia.

Como se ha visto, los recurrentes aducen que el vicio en la competencia que plantean conlleva dos facetas. Por un lado, que Jim Automóviles S.A. no es un sujeto obligado en los términos de la Ley n° 25.246, y por el otro que, como consecuencia de ello, la U.I.F. carece de competencia para exigirles el cumplimiento de obligaciones que no los alcanzan.

En el remedio bajo examen se interpreta que, de la lectura de lo normado por el artículo 20°, inciso 21 de la Ley n° 25.246 (en su redacción al momento de los hechos de autos) y por el artículo 2°, incisos a) y b) de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, se desprende que “sujeto obligado” es quien realiza de manera habitual operaciones de compraventa de los bienes allí enumerados y se relaciona con sus clientes a través de operaciones de compraventa que éstos hacen con el sujeto obligado.

Dichas circunstancias, según sostienen, implicarían que Jim Automóviles S.A. no se encuentra comprendido en la referida categoría, por cuanto no realizaría operaciones de compraventa de vehículos con la habitualidad exigida por la norma. Por el contrario, según dicho criterio, la firma se dedica a la intermediación entre comprador y vendedor, cobrando únicamente una comisión por tal labor, sin que ello implique celebrar operaciones de compraventa con sus clientes.

En este sentido, cabe señalar que, conforme fuera reseñado en el Considerando VII de la presente, la Resolución U.I.F. n° 489/2013 –en su redacción vigente al momento de los hechos que originaron la presente causa, esto es, sin la modificación dispuesta por la Resolución U.I.F. n° 117/2019 (B.O. 19/11/2019)–, definió como “Sujetos Obligados” a: “Las personas físicas o



jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior, automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados, que deban registrarse ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor” (cfr. artículo 2º, inciso a, de la referida normativa).

Ahora bien, con miras a analizar si la sociedad recurrente reviste la calidad de “sujeto obligado”, corresponde poner de resalto que a fs. 17/20 vta. de las actuaciones administrativas se encuentra glosada la Escritura de Constitución de Jim Automóviles S.A., de fecha 24/02/2006.

De la mentada copia, en cuanto aquí interesa, se desprende que “[l]a sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, dentro y fuera del territorio de la República Argentina, las siguientes actividades: La compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación, *leasing*, promoción, *franchising*, alquiler, permuta, distribución, transporte, *service*, reparación, mantenimiento y cualquier forma de comercialización de todo tipo de vehículos, autos, camiones, camionetas, 4x4, motos, nuevos y usados, sus partes, repuestos y accesorios...” (véase, fs. 17 vta. de las actuaciones administrativas).

Asimismo, a fs. 2/3 de las actuaciones administrativas obran agregados los “datos de registración” de la sociedad actora, obrantes en el “Sistema de Reportes de Operaciones” de la U.I.F..

De la copia indicada, surge que la persona jurídica Jim Automóviles S.A. fue registrada en el sistema con fecha 20 de noviembre de 2014. En cuanto aquí importa, también se consignó como fecha de constitución de la sociedad el “24/02/2006” y, como “actividad”, la “Venta de vehículos automotores, usados n.c.p. (Incluye casas rodantes, *trailers*, camiones, remolques, ambulancias, ómnibus, microbuses y similares, cabezas tractoras, etc...)”.

A mayor abundamiento, a fs. 24 obra agregada una nota dirigida al Ministerio de Finanzas – U.I.F. suscripta por el Sr. Matías Carlos Munafo en su carácter de “apoderado” de Jim Automóviles S.A. (conforme surge del “poder general amplio de administración y disposición otorgado a su favor, obrante a fs. 9/12 de las actuaciones administrativas) en la cual indicó que “la actividad está centrada en la comercialización de vehículos automotores, propios y de terceros. Incluye compras en comisión, consignación e intermediaciones...” (sic, fs. 24 de las actuaciones administrativas).

De igual modo, en las distintas “constancias del trabajador – alta” emitidas ante la AFIP, se consignó como “empleador: Jim Automóviles S.A.” y como





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

“actividad económica: ...venta de autos, camionetas y utilitarios, nuevos” (v. fs. 25/34 de las actuaciones administrativas).

Por otra parte, a fs. 35 obra copia de los “estados contables por el ejercicio finalizado el 31/01/2015” respecto de la sociedad recurrente, suscripta por el Sr. Contador Público, Rodolfo Jorge Brizi, y por la Sra. María Natalia González Gordillo, en su carácter de presidente de Jim Automóviles S.A.. En lo que aquí respecta, se indicó como “actividad principal de la sociedad: venta e importación de vehículos automotores”.

Así también, luce coincidente la actividad principal consignada en la copia de los “estados contables por el ejercicio finalizado el 31/01/2016”, suscripta por el Sr. Contador Público, Roberto Antonelli, y por la Sra. María Natalia González Gordillo, en su carácter de presidente de Jim Automóviles S.A. (v. fs. 51 de las actuaciones administrativas).

Recapitulando estos elementos, de la ponderación global y particularizada del sumario administrativo, es dable inferir que la actividad de la sociedad actora encuadra en el concepto de compraventa habitual de automóviles que deban registrarse ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, conforme lo establece la norma.

En efecto, frente al contexto descripto forzoso es concluir que no se ha probado que la empresa recurrente no efectúe compraventa de forma habitual de los bienes identificados en la norma. En suma, la actuación de la U.I.F., en tanto consideró como “sujeto obligado” a Jim Automóviles S.A., luce ajustada a derecho y sustentada en la prueba acompañada en las actuaciones sumariales.

Por lo demás, los recurrentes no han aportado elementos de convicción que desvirtuaran seriamente la circunstancia aquí analizada.

En este sentido, también debe recordarse que en materia de prueba, además de la documentación eventualmente recolectada, el Máximo Tribunal ha reconocido desde antiguo la aplicación de sanciones sobre la base de prueba de indicios concordantes y precisos (*Fallos*, 211:443; entre otros), siendo, en su caso, los apelantes quienes se encuentran en mejores condiciones para demostrar en sede judicial que las afirmaciones de la autoridad administrativa carezcan de asidero; circunstancia que, ciertamente, no ocurre en autos (ver Sala IV, si bien *mutatis mutandis*: “Intermutual SA y otros c/



B.C.R.A. Resol. 185/11 –exp. 100032/01 sum fin 1026–”, causa n° 29.797/11, sentencia de fecha 29/10/2013).

Asimismo, se ha contemplado que las reglas atinentes a la carga de la prueba deben ser apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, a los efectos de dar primacía –por sobre la interpretación de las normas adjetivas– a la verdad jurídica objetiva, de modo que el esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal (cfr. doctrina de *Fallos*, 308:1881; 319:1577; 324:115, entre otros).

Por lo demás, no debe dejar de mencionarse que el artículo 377 del C.P.C.C.N., ha plasmado un principio elemental del Derecho Procesal, que establece que quien alega un hecho debe probarlo. Es decir que, cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende. La actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo del propio interesado. Esa actividad procesal es la encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante, quien a su vez puede llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva (cfr. C.S.J.N., *Fallos*, 318:2555; 321:1117; 331:881; entre muchos otros).

Dicha carga, ciertamente, no aparece satisfecha por los recurrentes, lo que impide dar procedencia al agravio bajo análisis.

Como corolario de lo hasta aquí señalado, se concluye que deben desestimarse los planteos incoados en este aspecto.

IX.- Que, por lo demás, tampoco proceden las argumentaciones de los accionantes, vinculadas a la supuesta vulneración del principio de legalidad (desarrollado en el apartado VI.2., b, del escrito recursivo).

Al respecto, a fin de guardar coherencia con la naturaleza administrativa de lo resuelto por la U.I.F., cabe tener presente que en forma reiterada esta Sala ha dispuesto que en los regímenes de policía administrativa, la punición por la autoridad encargada del cumplimiento del régimen, suele contar con un ordenamiento que no exige la determinación de todas las conductas objetivamente contrarias a los preceptos de la ley, pues como lo ha determinado pacíficamente la jurisprudencia (en razonamientos que son extensibles al caso bajo análisis), no puede pretenderse la existencia de un tipo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

penal concreto en estas materias (esta Sala *in rebus* “Club Atlético San Lorenzo de Almagro c/ U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 art. 25”, causa n° 61792/2018; “Lammens Núñez, Matías Daniel y otros c/ U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 art. 25”, causa n° 62191/2018, sentencia de fecha 30/10/2020; y “Iglesias Negocios Inmobiliarios S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25”, causa n° 2.636/2021, sentencia de fecha 23/12/2021, entre otros).

En consonancia con los lineamientos jurisprudenciales recordados, también debe tenerse presente que las sanciones impugnadas en autos tienen naturaleza administrativa, y no son otra cosa que la consecuencia del ejercicio del poder de policía por parte de la autoridad que fue oportunamente designada por el Congreso de la Nación al efecto (conf. artículos 5 y 6 de la Ley n° 25.246). Es que los castigos que impone la autoridad de aplicación en cumplimiento de los deberes que le fueron encomendados tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de las medidas represivas contempladas en el Código Penal de la Nación; por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del derecho penal (conf. esta Sala, *in rebus*: “Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25”, causa n° 42.840/13, sent. del 14/08/2014, y “Sergio Villella S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 Dto 290/07 art 25”, causa n° 2.342/18, sent. del 28/08/2018).

Precísese que las sanciones que se imponen como consecuencia de la inobservancia de las prescripciones contenidas en las normas que conforman el plexo normativo bajo examen –Ley n° 25.246 y normas complementarias y reglamentarias, de las que vale recordar, en el caso, la Resolución U.I.F. n° 489/13–, constituyen infracciones administrativas; respecto de las cuales no procede convalidar la aplicación indiscriminada o acrítica de los principios que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por la normativa específica; lo que se ve reafirmado por la naturaleza preventiva del derecho administrativo sancionador, por contraposición con la represiva del derecho penal (conf. –en este sentido– dictamen de la Procuración General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver en autos: “Comisión Nacional de Valores c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete



accionario a Nabisco”, pronunciamiento del 24/04/2007, registrado en *Fallos*: 330:1855).

En este orden de razonamientos, se ha resuelto que si bien en el campo de las sanciones de índole administrativa, los principios conformadores y garantísticos del derecho penal están presentes, se modulan en diferente modo, de manera tal que la tipicidad juega en forma menos estricta, dados los distintos valores involucrados y la imposibilidad práctica de una individualización llevada con la extremada –y justificada– puntiliosidad atribuible al ilícito penal sustantivo (doc. De esta Sala, en autos “Alleloccic SA -RQ- c/ SAGPA – Resol. n° 148/08 – Expte. n° 800:3575/01”, causa n° 23.287/11, del 13/03/2012; Sala I, “Roldán Héctor Omar c/ PNA – Disp. DPSJ JS1 n° 158 A/96”, causa n° 5.723/97, del 08/09/98; “Gutiérrez Tito Ramón c/ PNA – Disp. JS1 491/04 – Expte. 489-C-B/03”, causa n° 28.667/07, del 28/09/2010; Sala V, “Fazioli Marcelo Héctor c/ PNA – Disp. DPSJ JS1 348/00”, causa n° 61.148/02, del 22/05/2002, entre muchas otras).

Ello es así, pues de lo contrario se frustraría la finalidad de la norma y se tornaría inoperante la potestad sancionatoria, al hacer depender su ejercicio del riguroso requisito de la tipicidad. De tal modo, en tanto las contravenciones de orden administrativo no equivalen a las conductas que merecen reproche criminal, no cabe exigir a su respecto la precisión en la descripción del obrar antijurídico, en tanto no son comparables, en significación y gravedad, las consecuencias previstas en uno y otro régimen (doc. esta Sala, “Helguero, Marta E. y otros c/U.I.F.” ya citado *supra*). En suma, la exigencia de descripción previa de la conducta prohibida no es aplicable en el ámbito sancionador con el rigor que es menester en el ámbito penal (doc. *Fallos*: 321:2086).

En definitiva, lo señalado hasta aquí basta para considerar inadmisibile el planteo que se acaba de analizar.

X.- Que, en este contexto, y despejado lo anterior, corresponde continuar con el examen de los restantes aspectos que conciernen a los agravios sobre la regularidad de la medida atacada, analizándose si se verificaron las trasgresiones que conllevaron a la aplicación de las sanciones recurridas.

Así las cosas, a fin de aportar claridad al análisis de las cuestiones traídas a conocimiento de esta Sala, cabe referir que se seguirá el siguiente camino en el examen de los planteos vertidos.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

En este sentido, corresponde primeramente referirse a los supuestos vicios en la motivación, en la causa y en el procedimiento que ostentarían las resoluciones impugnadas. Conjuntamente, se examinarán los agravios vertidos respecto de los distintos criterios adoptados en la U.I.F. con relación a la situación de los accionantes.

Una vez discernido ello, se pasará a considerar el planteo efectuado en forma subsidiaria por los recurrentes, respecto a supuesta ilegitimidad y arbitrariedad de las multas impuestas por los cargos imputados.

Finalmente, cabe referirse respecto del *quantum* de las sumas impuestas y del planteo de inconstitucionalidad del monto mínimo de la pena prevista por en el inciso 1° del artículo 24, de la Ley n° 25.246.

En tal examen, no debe perderse de vista que según la jurisprudencia general y pacífica, el apartamiento de las conclusiones alcanzadas por los organismos administrativos técnicos con facultades jurisdiccionales –tal el caso de la Unidad de Información Financiera–, sólo puede justificarse con la demostración de que ha mediado error, omisión o vicio con entidad suficiente para invalidar el acto (conf. –en este sentido y respecto de otros regímenes– esta Sala, *in rebus*: “Unilever de Argentina S.A. c/ D.N.C.I. - Disp. 87/13”, del 13/3/2014; “Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica c/ D.N.C.I. - Disp. 675/09”, del 18/11/2010; “Bianca, Sebastián c/ P.N.A.”, del 10/8/2010; “Vezzato S.A. c/Resol. 228/08 - Enargas”, del 22/10/2009, entre otros; más concretamente: esta Sala en autos “Sergio Villella S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 art. 25”, expte. n° 2342/2018, sent. del 28/08/2018), lo que no aconteció en autos.

Es que, para desvirtuar la validez de las actuaciones labradas por la U.I.F. y las conclusiones alcanzadas por su presidente, no bastan meras afirmaciones del sumariado porque, en definitiva, todo lo actuado y, en especial, el acto sancionador cuya invalidez aquí se persigue, goza de la presunción de legitimidad consagrada en el artículo 12 de la Ley n° 19.549.

Al respecto, se ha dicho que se presume que la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente. La jurisprudencia es casi unánime en reconocer tal carácter a los actos administrativos e interpreta que ésta cede únicamente ante la demostración de los vicios que lo privan de validez jurídica, o en otras palabras, “cuando la



decisión adolece de vicios formales o sustanciales o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares, reconocidos o fehacientemente comprobados” (conf. Gordillo, Agustín y Danielle, Mabel – Directores–, *Procedimiento Administrativo. Decreto ley 19.549/1972 y normas reglamentarias - Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comentados y concordados*, 2º ed., Lexis Nexis, Buenos Aires, pág. 160; y esta Sala, *in rebus*: “Lan Airlines S.A. c/D.G.A. - Resol. 1.092/03 y Resol. 75/07 - Exp. 420.900/98”, del 30/7/2009; “Martínez, Silvia Beatriz c/ Mº de Seguridad s/ Registro Nacional de Precursores Químicos - Ley 26.045 - Art. 16”, causa nº 6722/2018, del 17/5/2018, entre muchos otros; y puntualmente respecto a las atribuciones de la U.I.F.: autos “Sergio Villella S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 art. 25”, expte. nº 2342/2018, ya citado).

Tal resulta ser, en el marco legal vigente, el punto del que debe partirse en el análisis del caso, pues así lo exige la peculiar naturaleza del procedimiento administrativo llevado a cabo. Si se adoptara otra tesitura, la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando –por el contrario– es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (cfr. C.S.J.N., *Fallos*: 294:69; 328:53, entre otros).

Consecuentemente, recae en el particular el deber de acompañar elementos probatorios de tenor suficiente como para desvirtuar tal presunción.

XI.- Que, sentado ello, cabe adentrarse al primero de los planteos referidos en el considerando que antecede.

En tal sentido, corresponde señalar que los accionantes postulan que la Resolución U.I.F. nº 3/2021 resulta nula de nulidad absoluta por cuanto el presidente de la U.I.F. se habría apartado del criterio de la Asesoría Legal, sin brindar, a criterio de aquéllos, suficiente y razonada motivación al hacerlo.

Sobre esta base, estiman que a raíz de la apuntada circunstancia que tachan de defecto, la Resolución U.I.F. nº 3/2021 ostentaría un vicio en su motivación.

Así las cosas, cabe adelantar que las quejas esbozadas por los recurrentes no pueden obtener favorable acogida. Ello resulta así, toda vez que de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

lectura de la Resolución nº 03, de fecha 20/01/2021, dictada por el Sr. Presidente de la U.I.F., se desprende que el apartamiento de las conclusiones arribadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos, sí se encuentra debida y suficientemente fundada.

En efecto, conforme fuera señalado en el Considerando VI de la presente, el Sr. Presidente de la U.I.F. indicó que no compartía la valoración de la prueba ni la interpretación del derecho que había efectuado la Dirección de Asuntos Jurídicos en sus dos intervenciones.

En este sentido, puso de resalto que “las constancias obrantes” en el expediente habían sido las mismas que, en su oportunidad y con el dictamen favorable de esa misma asesoría legal (v. fs. 257/267), habían fundamentado el dictado de la resolución de apertura del procedimiento sumarial. Asimismo, indicó que *a posteriori*, no se había producido prueba alguna que demostrara en forma asertiva la falta de calidad de sujeto obligado de Jim Automóviles S.A. En efecto, sostuvo que la prueba producida por el sumariado no era conducente a dichos fines. A ello agregó que, en el criterio sostenido en los dictámenes referenciados, incluso se había omitido considerar la prueba agregada en autos que acreditaba tal calidad; entre la cual recordó la propia conducta del sumariado, que había procedido a registrarse como tal ante la U.I.F. y que, en tal carácter, había agregado como prueba documental el “Manual de Procedimiento en materia de Prevención de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

Profundizando el análisis, y en lo atinente a las pruebas documentales agregadas como “Nros. 2 y 3” –copias de una Resolución Judicial y de un Estado de Dominio e histórico de Titularidad–, dicho funcionario postuló que en nada acreditaban las circunstancias de no ser sujetos obligados.

En igual sentido, el máximo responsable del organismo administrativo refirió que “las explicaciones brindadas en el descargo” –por las cuales los sumariados pretendían que Jim Automóviles S.A. no era sujeto obligado ante la U.I.F.– eran meras alegaciones que no se encontraban respaldadas por prueba alguna y, como tal, carecían de todo valor.

En definitiva, en este marco, el Sr. Presidente de la U.I.F. indicó que se pronunciaría, apartándose del criterio propuesto por la Dirección de Asuntos Jurídicos en los dictámenes referenciados.

Fecha de firma: 09/04/2024

Firmado por: JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#36260739#400694106#20240408195401326

En tal sentido, cabe poner de resalto que, si bien los dictámenes constituyen un recaudo del acto administrativo, de acuerdo con lo previsto en el inciso d) del artículo séptimo de la Ley n° 19.549, de ningún modo importan un acto decisorio, sino consultivo, propio de la administración interna, por lo cual no resultan vinculantes para el órgano decisor (conf. esta Sala, *in rebus* “Puente Hnos. Mae SA c/EN - M° Economía - Resol. 462/04 –Ex. S01:51.345/05– s/proceso de conocimiento” y sus citas, causa n° 9.812/2010, resolución de fecha 12/5/2015, y “Ar Co Arquitectura Construcciones SRL c/EN - M° Educación - ex Dirección Gral. Arquitectura Educ. y otro s/contrato obra pública”, causa n° 30.021/2000, sent. del 19/02/2019; y en el mismo sentido, véase Sala I en autos “Consorcio de Prop. de la Calle César Días 1975 c/resol. 945/97 ENRE”, sentencia del 12/05/2000, y “Luchini María Christina c/ UBA -Resol. 4620/05 -Expte.1227795/98-”, sentencia de fecha 04/02/2010).

En este sentido, aún considerando que el dictamen del servicio jurídico de la repartición fuera obligatorio, no deja de ser una actuación preparatoria de la voluntad que expresará luego la Administración pública, con lo que no es susceptible de ser impugnado por recurso alguno, al no producir, por lo dicho, efectos jurídicos directos o inmediatos.

Bajo una afín comprensión, se ha entendido que “...los dictámenes son actuaciones interorgánicas que no comprometen a la voluntad administrativa y en tanto no tengan carácter vinculante, el órgano competente para dictar el acto administrativo puede o no acoger la solución jurídica o técnica propuesta” (véase, al respecto, Sala IV, *in rebus*, “Santana, Carlos Alberto c/ E.N. - M° Educ. y Justicia s/ empleo público”, sent. del 29/08/1995, y más recientemente: “Syphon S.A. c/E.N. M° Economía Rsl. 485/11 – SSIP Rsl. 5/11 -S01:140156/03- causa n° 48.439/2011, sent. del 22/09/2016).

En definitiva, como regla, y salvo disposición en contrario (que no se advierte rija para el presente caso), los dictámenes no resultan ser vinculantes para la Administración activa; sino que constituyen un elemento importante para tomar la decisión, pero ciertamente no la determinan.

Resta señalar que en nada modifica lo que se viene señalando el hecho que hubiera dictámenes previos al acto definitivo que hayan avalado la pretensión actoral, en tanto por lo antes dicho aquéllos constituyen meros actos preparatorios de la voluntad administrativa, que carecen de efecto





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

decisorio y de la aptitud de obligar al órgano con competencia para resolver (conf. esta Sala, *in rebus* “Ricciardi, Ricardo Alberto c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” y sus citas, causa n° 6.335/2014, sentencia del 09/09/2014, y “Ar Co Arquitectura Construcciones SRL c/EN - M° Educación - ex Dirección Gral. Arquitectura Educ. y otro s/contrato obra pública”, causa n° 30.021/2000, sent. del 19/02/2019).

Como fuese, es también dirimente que las razones dadas por el titular del organismo administrativo lucen revestidas de seriedad y principalmente de coherencia lógica con el contexto del caso, además de ser plausibles y razonablemente ajustadas al derecho aplicable en vista de las constancias obrantes en el sumario, lo que las deja al abrigo de la tacha que le dirigen los recurrentes.

En suma, corresponde desestimar las quejas de los actores en lo que respecta a los planteos aquí analizados.

XII.- Que, por lo demás, cabe adentrarse en el análisis de los agravios vertidos respecto del alegado vicio en el procedimiento.

En este punto, cabe tener presente que los recurrentes concretamente refieren que, con posterioridad a la intervención del Consejo Asesor, las actuaciones deberían haber sido remitidas a la DAJ. Dicho giro propugnan debió hacerse, a efectos de ejercer el debido control de legalidad sobre: 1) los fundamentos vertidos por el Consejo Asesor para cambiar rotundamente el temperamento de la Asesoría Legal del Organismo; 2) si se introdujeron nuevos hechos o elementos que justificaren la modificación de dicho temperamento; 3) Si se cumple acabadamente con la motivación de la decisión, pese a apartarse del dictamen de la DAJ.

Ahora bien, en este sentido, cabe referir que el artículo 36 de la Resolución U.I.F. n° 111/2012 establece que “[p]ara todo aquello que no se encuentre expresamente previsto en la presente reglamentación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos n° 19.549, su Decreto Reglamentario n° 1759/72 (T.O. 1991 por Decreto n° 1883/91) y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.

Por lo demás, el inciso d) del artículo 7° de la Ley n° 19.549, en lo que aquí importa, dispone que “...[s]in perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de



los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos...”.

Así también, cabe referir que el artículo 16 de la Ley n° 25.246 (artículo sustituido por art. 1° de la Ley n° 26.119 B.O. 27/7/2006) –en su redacción vigente al momento de los hechos– establecía que “[l]as decisiones de la U.I.F. serán adoptadas por el Sr. Presidente, previa consulta obligatoria al Consejo Asesor, cuya opinión no es vinculante”.

Ahora bien, frente a dicho marco normativo, no es dable soslayar que, según se observa y deriva de la secuencia de actuaciones reseñada, la autoridad de aplicación obró conforme a lo establecido en los artículos citados precedentemente.

En efecto, conforme fuera reseñado en el Considerando VI de la presente, previo al dictado de los actos aquí impugnados, la Asesoría Jurídica de la U.I.F. tuvo oportunidad de expedirse respecto de la situación de los actores en dos ocasiones (v. Dictámenes nros. 130/19 y 04/20 obrantes a fs. 774/777 y 797/804 de las actuaciones sumariales). En virtud de ello, forzoso es concluir que el recaudo previsto en el inciso d) del artículo 7° de la Ley n° 19.549 no se encuentra conculcado.

Por lo demás, en nada modifica lo aquí indicado, el planteo referido a que el Acta del Consejo Asesor no resulte vinculante para el Sr. Presidente de la U.I.F., pues dicha circunstancia se desprende de la lectura de la norma reseñada.

Sin perjuicio de ello, que la máxima autoridad de la U.I.F. hubiera compartido el criterio vertido por el Consejo Asesor, no es susceptible de implicar un agravio para los aquí recurrentes, pues, conforme cuanto fue planteado, dicho agravio luce como una mera discrepancia con el sentido y hermenéutica seguidos en las actuaciones impugnadas, inhábil de por sí para enervar lo dispuesto.

En suma, no se vislumbra que las resoluciones aquí recurridas ostenten un vicio en su procedimiento que justifique la procedencia de los remedios intentados.

Asimismo, como se ha recordado en el Considerando X de la presente, recae sobre el particular el deber de acompañar elementos probatorios de tenor suficiente como para desvirtuar la presunción de legitimidad consagrada en el artículo 12 de la Ley n° 19.549, circunstancia que no se verifica en la especie.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

A mayor abundamiento, cabe recordar que quien plantea la nulidad de un acto debe señalar tanto los vicios que éste presente como el perjuicio sufrido, y con esa finalidad, no es suficiente la mera invocación de la vulneración del derecho de defensa si el interesado no indica, concretamente, las defensas que se ha visto impedido de oponer por el vicio alegado, y de qué modo ese vicio habría incidido en el ejercicio de aquel derecho para que, eventualmente, la autoridad administrativa arribara a una solución distinta de la adoptada (doc. *Fallos*: 320:1611; esta Sala, “Riquelme Medina”, causa n° 31.485/14, del 16/06/2015; “Bossi Arancibia”, causa n° 24.656/15, del 29/09/2015; “Laboratorios Imvi”, causa n° 43.131/15, del 20/10/15; “Giménez”, causa n° 1.354/15, del 17/11/15; “Coto”, causa n° 68.816/15, del 25/08/2016; Sala III, “David Lucio Alberto”, causa n° 23.005/12, del 04/02/2014; “Securitas Argentina”, causa n° 16.710/13, del 04/02/14, “Club Atlético San Lorenzo de Almagro c/ Unidad de Información Financiera s/ Código Penal -Ley 25.246- Dto. 290/07- Art. 25”, causa n° 22.843/2018, sent. del 30/10/2020, y “Lammens, Matías Daniel y otros c/ Unidad de Información Financiera s/ Código Penal -Ley 25.246- Dto. 290/07- Art. 25”, causa n° 22.863/2018, ya citada anteriormente.

Además, por aplicación de la regla según la cual no hay nulidad sin perjuicio –no pudiendo entonces procurarse la declaración de nulidad por la nulidad misma– la procedencia de planteos nulidicentes por el procedimiento seguido exige la acreditación de un daño serio e irreparable que no pueda ser subsanado sino por medio de esa declaración (art. 172, C.P.C.C.N.; en igual sentido esta Sala *in rebus*, “Saggese”, causa n° 7.836/15, del 03/11/2016; “Cooperativa de Crédito Premium Limitada”, causa n° 54.828/13, del 18/06/2015; “Vela Sánchez”, causa n° 5.852/13, del 08/07/2013, “Bau Amigo Propiedades SRL y otro c/ U.I.F. - Ex. 798/18- Resol 45/22 c/ U.I.F. s/ Código Penal -ley 25.246- dto. 290/07 art. 25”, causa n° 44.751/2022, sentencia del 22/12/2023).

Como corolario de lo expuesto, procede desestimar aquellos agravios dirigidos a aseverar la existencia de vicios graves en el procedimiento como sustento para la declaración de nulidad de lo actuado en consecuencia. La faz adjetiva del sumario, en consecuencia, luce al abrigo de las tachas que se le dirigen en el recurso bajo examen.



Por lo demás, cabe aclarar que la solución a la que se arriba en este considerando, resulta aplicable a las manifestaciones de los recurrentes en lo atinente a los desarrollos en los que se describen “diferentes criterios vertidos por la U.I.F.” (véase, página 56 del escrito recursivo).

En concreto, los lineamientos recordados en dicho tramo del memorial remiten a que, en el marco del procedimiento sancionatorio de marras, las direcciones del Régimen Administrativo Sancionador y de Asuntos Jurídicos propusieron un criterio, mientras que, por otra parte, el funcionario investido de la competencia decisoria hizo suyo el criterio contrario, sostenido –según se ha descrito– por el Consejo Asesor de la repartición.

Sobre el punto, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, cabe concluir que las afirmaciones de los recurrentes no son suficientes para modificar lo decidido en sede administrativa, en tanto importan una simple discrepancia con la interpretación de las cuestiones decididas, y no representan una crítica del tenor, peso y seriedad exigibles frente a los distintos fundamentos que sustentan la resolución cuestionada.

XIII.- Que, por otra parte, los recurrentes aducen la existencia de un vicio en la *causa* de las resoluciones impugnadas.

Sobre este aspecto, aquéllos postulan que, dado que no encuadrarían en la categoría de “sujetos obligados” ante la U.I.F., no pesaría sobre ellos la obligación de cumplir con los deberes cuyo “incumplimiento” se les imputó en el referido sumario.

En este orden de ideas, arguyen que la sanción aplicada deviene infundada y de ello derivan que las resoluciones recurridas resultan insanablemente nulas por falta de causa.

Asimismo, agregan que tampoco se configuró el elemento subjetivo necesario para la imputación de los ilícitos previstos en la Ley n° 25.246. Refieren, en ese sentido, que el principio de culpabilidad no solo se aplica al ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador, y merced a este principio, no basta la sola afectación o puesta en peligro de un bien jurídico, sino que no puede haber pena sin dolo o culpa.

En efecto, arguyen que “... la mera omisión formal no es constitutiva de infracción alguna” (*vide*, página 54 del escrito de inicio).

Ahora bien, frente a los planteos esbozados en este acápite, en primer lugar, cabe remitirse a lo indicado en el Considerando VIII de la presente,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

respecto de la subsunción de la sociedad recurrente en la categoría de “sujeto obligado”, lo cual ha sido discernido en sentido afirmativo, lo cual sella negativamente la suerte del planteo en cuestión.

Por lo demás, señálese que no resultan procedentes los argumentos exculpatorios intentados por los aquí actores, en el entendimiento de que basta con la falta de observancia de los recaudos analizados –verificándose consecuentemente las conductas tipificadas en los preceptos reseñados– para hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados, toda vez que se requiere para su configuración, simplemente, el incumplimiento de lo prescripto por la norma (cfr. Sala IV, “Banco Macro S.A. y otros c/ U.I.F. y otro s/ recurso directo”, causa nº 25.754/11, sent. del 25/06/2019; asimismo, esta Sala *in rebus* “Banco Patagonia S.A. c/ U.I.F. s/ Código Penal -Ley 25.246- Dto. 290/07 art. 25”, causa nº 55.011/18; y, “Andreo Alledo, Claudemir y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal -Ley 25.246- Dto. 290/07 art. 25”, causa nº 55.017/18, sentencia única del 29/10/2019; entre otras). Además, no se requiere daño concreto alguno, sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley (conf. esta Sala, *in re*: “Emebur”, cit. y sus citas).

Se infiere de esta conceptualización, además, que este tipo de infracciones, tal como las contempladas en otros regímenes –como el de la defensa del consumidor y la lealtad comercial–, son de las denominadas *formales*. Se trata de aquellos ilícitos señalados como de “pura acción” u “omisión” y, por tal motivo –contrariamente a la tesitura propiciada por los recurrentes–, su apreciación es objetiva.

Dicho criterio ha sido aplicado de modo sostenido y consolidado por esta Sala, siendo profusa la jurisprudencia sobre el punto. Véase, a modo de ejemplo, *in rebus*: “Castex Propiedades S.A. c/ DNCI”, sentencia de fecha 28/02/2012; “Aguas Danone de Argentina S.A. c/ DNCI”, sentencia de fecha 1º/12/2009; “Viajes Ati S.A.- Empresa de Viajes y Turismo c/ DNCI”, sentencia de fecha 13/03/2009; “Transclor S.A. c/ Sedronar- Disp. 2.323/12 Expte. 839/10”, sentencia de fecha 11/07/2013; y, “Castex Propiedades S.A. c/ DNCI - Disp. 351/10”, sentencia de fecha 28/09/2012; y, más recientemente en materia de multas también impuestas por la U.I.F., en los autos: “Club Atlético San Lorenzo de Almagro c/ U.I.F. s/ Código Penal -Ley 25.246- Dto. 290/07 art. 25”, causa nº 61.792/18; “Lammens Núñez, Matías Daniel y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal -Ley 25.246- Dto. 290/07 art. 25”, causa nº



62.191/2018, sentencia única del 30/10/2020; y en igual sentido, véase de la Sala V, el caso “Entretenimientos y Juegos de Azar SA y otros c/U.I.F. s/ cód. penal -Ley 25.246 - Dto. 290/07- art. 25”, causa nº 46.287/19, sent. del 16/09/2021; entre muchos otros.

Es por ello que no puede afirmarse válidamente que los incumplimientos detectados no lleguen a tener una entidad suficiente para lesionar el bien jurídico tutelado. En efecto, las normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada, bajo apercibimiento de las sanciones allí previstas.

En definitiva, y teniendo en cuenta lo expuesto, cabe remarcar que tanto la existencia de dolo o culpa son indiferentes en casos como el analizado. Es que, en el régimen de policía administrativa, la constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor, salvo que éste invoque y demuestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida (conf. esta Sala, *in rebus*: “Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Ltda. y otros c/ B.C.R.A. – Resol. 483/12”, sent. del 12/06/2014; “Lifsic de Estol”, causa nº 6.374/16, sent. del 4/10/2016, y sus citas; “Libres Cambio S.A. y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ Entidades Financieras – Ley 21.526”, causa nº 51.474/15, sent. del 8/06/2017; y, “Banco Patagonia S.A.” y “Andreo Alledo, Claudemir y otros”, ya citados), extremos que no se encuentran acreditados en la especie. En todo caso, el acto administrativo recurrido explica, en forma circunstanciada, los antecedentes fácticos y el encuadre jurídico de los cargos reprochados, de modo tal que las exigencias de motivación del acto y, en consecuencia, la exteriorización de su causa, aparecen como debidamente cumplidas.

XIV.- Que, determinado lo anterior, corresponde analizar los planteos esbozados por los accionantes, en forma subsidiaria, con relación a la alegada arbitrariedad e ilegitimidad de las sanciones impuestas.

En primer término, cabe referir –respecto de las sanciones que se analizaran en este Considerando– que los aquí recurrentes no negaron en modo alguno la materialidad de los hechos, pues en sus memoriales refirieron diversas cuestiones, más sin poner en entredicho la plataforma fáctica en que se sustentaron las imputaciones aquí analizadas, ni la comisión de las infracciones achacadas.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

En efecto, respecto de la infracción a lo previsto en el inciso b) del artículo 3º y artículo 6º de la Resolución U.I.F. nº 489/2013 por falta de registración en el SRO de la U.I.F. del oficial de cumplimiento, sostienen que, en los hechos, la sociedad contaba con un Oficial de Cumplimiento, a pesar de no estar debidamente registrado, cuyo reproche relativizan, al interpretar que ello configuraba un mero error formal.

En lo atinente a la infracción a lo previsto en el inciso a) del artículo 3º y en el artículo 4º de la Resolución U.I.F. nº 489/2013 por la falta de Manual de Procedimientos en materia PLA/FT, arguyen que el referido manual fue acompañado en la etapa sumarial. En consecuencia, señalan que el proceder que motivó el cargo imputado, fue subsanado oportunamente.

Con relación a la infracción a lo previsto en el artículo 19 de la Resolución U.I.F. nº 489/2013 por la falta de confección del perfil transaccional de clientes, destacan que el Sr. Juan Ignacio Munafo, en su doble carácter de Administrador y Oficial de Cumplimiento, conocía personalmente a los clientes con los que operaba Jim Automóviles S.A.. Asimismo, sostienen que, ante la inexistencia de parámetros de riesgo determinados por la propia U.I.F., resultaba imposible que los sumariados hubieran incumplido con una carga que, según alegan, no existe específicamente.

Por último, en lo relativo a la infracción a lo previsto en los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Resolución U.I.F. nº 489/2013 por la falta de política de identificación y conocimiento del cliente y de la infracción a lo establecido en los incisos e), f) y g) del artículo 3º de la Resolución U.I.F. nº 489/2013 por la falta de cumplimiento de la implementación de herramientas tecnológicas en materia PLA/FT, de un sistema de alertas y de un registro de operaciones inusuales y de las operaciones sospechosas reportadas, refieren que resulta injustificado exigir a una empresa como la de marras el cumplimiento de dichos deberes, por cuanto las operaciones que realiza mensual y anualmente son pocas, los clientes son personas conocidas por los miembros del órgano de administración, y todo lo que la sociedad ha operado se encuentra debidamente registrado.

Ahora bien, cabe señalar que las referidas manifestaciones no pueden obtener favorable acogida para revertir lo resuelto. Ello es así, toda vez que, conforme fuera indicado con anterioridad, en las infracciones de tipo formal –



como las aquí analizadas— basta con la falta de observancia de los recaudos analizados para hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados.

A su vez, corresponde poner de resalto —a modo de reiteración— que no se requiere daño concreto alguno, sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley (conf. esta Sala, *in re* “Emebur”, cit. y sus citas). Incumplimiento que, por lo visto, quedó razonablemente acreditado, lo cual echa por tierra el núcleo argumental de los planteos esbozados.

En este orden de ideas, señálese que no resultan procedentes los referidos argumentos exculpatorios intentados por los aquí actores, pues, ante la inequívoca comprobación de los hechos, no rebatidos en sede judicial, la genérica invocación de los argumentos indicados *ut supra* no resultan eficaces para excusar las infracciones imputables a los actores.

XV.- Que, igual suerte negativa han de correr las manifestaciones de los impugnantes de las multas, en punto al reproche por el incumplimiento a lo previsto en el inciso c) y d) del artículo 3º, en el artículo 8º y 9º de la Resolución U.I.F. n° 489/2013, vinculado con la falta de auditorías y de capacitaciones.

En lo que atañe a las referidas infracciones, conforme fuera indicado con anterioridad, los recurrentes refieren que las auditorías internas anuales en materia de PLA/FT eran llevadas a cabo por el propio administrador de la sociedad.

Asimismo, según se ha visto y surge de autos, en dicho tramo de los agravios se expresa que la norma en cuestión carece de criterio objetivo sobre la modalidad a seguir en la realización de las mentadas auditorías. De esta manera, y dentro de contornos laxos, indican que la sociedad pudo válidamente escoger el sistema de auditoría que mejor convino para su estructura y volumen de actividad.

Por lo demás, respecto de las capacitaciones para el personal en materia de PLA/FT, postulan que el Sr. Juan Ignacio Munafo era quien capacitaba a sus empleados en estas y otras materias que hacen al mejor desempeño de sus actividades, previniendo de tal modo cualquier situación irregular.

Así, refieren que, si bien la U.I.F. señaló que no se había acompañado ninguna documentación que acredita dichas capacitaciones, lo cierto era que, al igual que el supuesto de las auditorías internas, la Resolución U.I.F. n°





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

489/2013 no establecía no brindaba parámetros objetivos para ello, ni disponía cómo deben dejarse asentadas.

Por cierto, todo lo sostenido al respecto, de cara a las circunstancias que se vienen refiriendo, revela que al estructurar estos agravios, los recurrentes no han desvirtuado la materialidad fáctica de los cargos que se les endilga; lo cual determina un claro supuesto de orfandad probatoria por parte de los accionantes, a quienes les incumbía la respectiva carga procesal. No puede soslayarse, a tal efecto, que, frente a los hechos imputados, la respectiva refutación hacía necesaria una labor probatoria de resultado contrario, que ciertamente en autos no ha llegado a realizarse.

Bajo tales condiciones, resulta aplicable el artículo 377 del Código de rito –en virtud de lo dispuesto en el punto 4º de la providencia de fecha 08/03/2022–, que establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende; de este modo, la actividad probatoria constituye, como toda carga procesal, un imperativo de interés propio del litigante, pues configura la actividad encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos (cfr. *Fallos*, 318:2555; 331:881, entre muchos otros).

En este orden de ideas, se ha de advertir que las constancias obrantes en las actuaciones llevan a este Tribunal a considerar que no se encuentra debidamente acreditado el cumplimiento de las obligaciones referidas en este. Considerando sobre auditorías y capacitación, lo que refrenda la regularidad y razonabilidad de las medidas que se impugnan en autos. En consecuencia, al no haberse demostrado el cumplimiento de las obligaciones analizadas, no es posible derribar los fundamentos expresados por la U.I.F. en el acto administrativo cuestionado, el cual luce razonablemente ajustado al bloque de normatividad aplicable, de cara a los hechos acreditados.

A mayor abundamiento, corresponde señalar que, si bien es cierto que no surge de la norma en cuestión la indicación expresa en cuanto a de qué modo debían realizarse las capacitaciones y las auditorías, no menos cierto es que, mínimamente, se debe contar con algún medio idóneo que permita corroborar su cumplimiento.

En definitiva, el análisis de la causa y la indagación precisa sobre este aspecto del recurso, permiten razonablemente concluir que las manifestaciones



defensivas no resultan en modo alguno suficientes a fin de refutar los sólidos fundamentos del acto que se ataca.

Por todo cuanto se viene expresando, las afirmaciones brindadas no logran desvirtuar en modo alguno los argumentos y la exégesis brindada por la U.I.F. en la resolución sancionatoria recurrida, en cuanto atañe al aspecto analizado.

XVI.- Que, descartadas las argumentaciones tendientes a derribar la procedencia de las sanciones impuestas a los aquí actores –según los desarrollos que anteceden–, resta entonces analizar los planteos que, con carácter subsidiario, expusieron los recurrentes respecto del *quantum* de las multas cuestionadas y la alegada inconstitucionalidad del monto mínimo de la pena prevista por el artículo 24, inciso 1° de la Ley n° 25.246 para la multa por la falta de reportes de operaciones sospechosas.

XVI.a.- Que, en tal cometido, razones de orden lógico indican que es preciso comenzar con el análisis de la alegada inconstitucionalidad del inciso 1° del artículo 24, de la Ley n° 25.246.

Cabe recordar que los recurrentes postulan que la Ley Antilavado, en cuanto al capítulo penal administrativo y, concretamente, respecto al incumplimiento del deber de reporte, establece sanciones de suma gravedad cuya aplicación, aun del mínimo de la escala legal a casos como el del presente sumario, implicaría una vulneración al principio de razonabilidad y al principio de congruencia entre los hechos imputados y la sanción a aplicar.

Por lo demás, sostienen que las especiales circunstancias del caso permiten concluir en la inconstitucionalidad que derivaría aun de confirmarse una multa con aplicación del artículo 24, inciso 1°, de la Ley n° 25.246. Estiman que ello resultaría así aun cuando se confirmaran las multas impuestas y se condenase a pagar el mínimo de la sanción pecuniaria prevista para las infracciones de omisión de reporte de operación sospechosa, pues inclusive en ese caso se evidenciaría la desmesura de la respuesta punitiva.

Sentado ello, y en cuanto al escrutinio constitucional que compete a esta Sala, debe recordarse –en línea con lo señalado por el Sr. Fiscal General– que, conforme inveterada jurisprudencia de la C.S.J.N., la declaración de inconstitucionalidad de un precepto normativo es una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, y configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

ultima ratio del orden jurídico (doc. *Fallos*: 209:26; 307:531; 312:72; 314:424; 316:1718; 322:842; 325:1922; 326:3882), por lo que sólo debe recurrirse a ella cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa (doc. *Fallos*: 324:3219; 327:1899; 343:140).

Es por ello mismo que el planteo de inconstitucionalidad exige un sólido desarrollo argumental y fundamentos suficientes para que pueda ser atendido y, por tanto, debe contener no sólo el aserto de que la norma impugnada causa agravio, sino la demostración de éste en el caso concreto, pues no compete a los jueces hacer declaraciones generales abstractas, al ser de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (doc. *Fallos*: 303:1633; 304:759; 305:518). De este modo, el interesado debe demostrar claramente de qué manera la contradicción de la norma con la Ley Fundamental le ocasiona un gravamen y para ello, debe precisar y probar fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera el precepto impugnado (doc. *Fallos*: 316:687; 324:3345; 325:645; 327:1899; 328:4282).

Empero, dicho recaudo no aparece satisfecho, atento a que el recurso examinado exhibe, sobre el punto, una ostensible falta de respaldo argumental (arts. 265 y 266, C.P.C.C.N.). En efecto, los recurrentes se limitaron a alegar la supuesta vulneración al principio de razonabilidad y al principio de congruencia entre los hechos imputados y la sanción a aplicar.

En virtud de ello, las críticas actorales son por demás dogmáticas, retóricas y genéricas, y aparecen absolutamente desprovistas de fundamentos serios. Así planteado el agravio, el mismo se reduce a una mera aseveración unilateral, huérfana de bases, y carente de mérito para revertir la medida que se impugna, y bajo una hermenéutica consecuencialista (aplicada por el Máximo Tribunal en *Fallos*, 319:1765; 320:607; 323:1635; 326:2095; y 331:1262 entre muchos otros), podría conducir indebidamente a desincriminar conductas con elevada idoneidad para vulnerar el bien jurídico que el legislador buscó proteger mediante el ordenamiento aplicable.

XVI.b.- Que, por lo demás, cabe desde ya anticipar que –por los fundamentos que siguen– los planteos en torno al reputadamente elevado *quantum* de las multas impuestas, no podrán tener favorable acogida.



Sobre el punto, puede tenerse presente que los encartados plantearon un exceso punitivo, en el entendimiento de que las multas impuestas, resultaban desproporcionadas con relación a los hechos que les fueron imputados.

En primer término, recuérdese que la graduación de la sanción es –en principio– resorte primario de la administración, constituyendo el ejercicio de un poder propio. Dentro de ella, la competencia ha sido asignada a un órgano especializado cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su razonabilidad sin que esto habilite a los jueces para sustituir el criterio administrativo (cfr. esta Sala, *in rebus*: “Martínez, Silvia Beatriz”, cit.; “Daian, Sebastián Adolfo y otro c/ U.I.F. s/ Código Penal - Ley 25.246 – Dto. 290/07 art. 25”, causa n° 48.480/19, sentencia del 13/08/2020, e “Iglesias Negocios Inmobiliarios S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal -Ley 25.246- Dto. 290/07 Art. 25”, causa n° 2.636/2021, sent. de fecha 23/12/2021, entre muchos otros).

Adviértase que el ejercicio de potestades con ribetes de discrecionalidad se traduce en libertad de opciones dentro del marco jurídico, pero a su vez implica el deber de fundar con la mayor precisión la concurrencia de la conducta punible y la imposición de la adecuada sanción. Es necesario entonces, la existencia de un juicio de razonabilidad en el que primero se acredite la falta, se determinen sus circunstancias atenuantes y agravantes, se establezca qué pena puede ser acorde a ella y, luego, su monto (cfr. Sala I del Fuero, en autos “Klass Ricardo y otros c/ CPACF”, causa n° 11.363/97, sentencia de fecha 18/12/2003; y esta Sala *in re* “Iglesias Negocios Inmobiliarios S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25”, causa n° 2.636/2021, sentencia de fecha 23/12/2021).

Además, en orden a la extensión y alcance económico de las multas impuestas, preciso es reconocer que la función judicial no puede reemplazar la acción de los otros poderes, ni asumir sus responsabilidades o sustituirlos en las facultades que a ellos les conciernen y que, precisamente en el ejercicio de la potestad sancionatoria, se reconoce al órgano competente un razonable margen de apreciación en la graduación de la pena a imponer (conf. esta Sala *in re* “Banco Macro S.A. y otros”, *supra* citado, y sus citas, entre otros).

Sin embargo, es preciso destacar que no hay actividad de la administración ajena al control judicial de legalidad y razonabilidad; es decir, que, aun tratándose de una manifestación de las potestades discrecionales,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

éstas en ningún caso pueden resultar contrarias al derecho. La actuación administrativa debe ser racional y justa y la circunstancia de que la Administración obre en ejercicio de facultades discrecionales no constituye justificativo de su conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (cfr. C.S.J.N. en *Fallos*: 304:721; 305:1489; 306:126; y, esta Sala, con otra integración, *in re*: “Ballatore Juan Alberto c/ E.N. – M° de Justicia s/ empleo público”, causa nº 15.026/93, sent. del 13/06/1996, en esp. consid. X; ver, en la actual composición, *in rebus* “Banco Macro S.A. y otros”, “Daian, Sebastián Adolfo y otro”, cit. e “Iglesias Negocios Inmobiliarios S.A. y otros” cit.).

Dentro de esa órbita se ha dicho que lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario, y significa, conforme a la razón, justo, moderado, prudente, todo lo cual puede ser resumido en arreglo a lo que dicte el sentido común (cfr. “Reglas para la interpretación constitucional”, Segundo V. Linares Quintana, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1987, pág. 122).

Sentado ello, adviértase que el ya referido artículo 24, inciso 1º, de la Ley nº 25.246 establecía que la persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante la U.I.F., será sancionada con pena de multa de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción. Al mismo tiempo, el inciso 3º determina que cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de pesos diez mil (\$10.000) a pesos cien mil (\$100.000).

Por su parte, en el inciso 2º del artículo citado, se disponía que la misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor, precepto con base en el cual la U.I.F. impuso la multa a Jim Automóviles S.A..

En definitiva, el marco normativo aplicado a los accionantes resulta claro en punto a las consecuencias que éstos debían enfrentar en caso de incumplimientos.

En este sentido, recuérdese que la primera fuente de interpretación de una norma es su letra, de la que no cabe apartarse cuando ella es clara, sin que



sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ésta, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violación de sus términos o su espíritu (conf. C.S.J.N., en *Fallos*: 330:2.286 y sus citas); y cuando ella no exige mayor esfuerzo, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (conf. C.S.J.N., en *Fallos*: 311:1.042 y esta Sala, *in re*: “Taraborelli Automobile S.A. c/ DNCI – Disp. 690/11”, causa n° 1.283/12, sent. del 30/10/2012).

Así las cosas, en el caso, la autoridad de aplicación resaltó que, para la determinación de la multa impuesta, se tuvo en cuenta la naturaleza de cada uno de los incumplimientos detectados; la cantidad de infracciones cometidas que demostraban un elevado riesgo para el sistema PLA/FT; y, la insistencia por parte de los sumariados en instancia sumarial respecto a que no debían cumplir con las obligaciones en materia PLA/FT.

Por otra parte, a los efectos de fijar el *quantum* de la sanción, también se ponderó que, conforme se desprendía de las constancias de autos, las operaciones en las que había intervenido Jim Automóviles S.A. involucraban vehículos de alta gama, por lo que, todos y cada uno de los incumplimientos a la normativa que comprendía la política de conocimiento e identificación del cliente –detallada en los cargos analizados– conllevaba cada uno de ellos y en conjunto, un elevado riesgo para el sistema preventivo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, políticas públicas definidas por nuestro país en su legislación para posibilitar el imperio de la legalidad y el estado de derecho, en pos del bienestar general.

Ahora bien, lo cierto es que la compulsa de las constancias de autos y el análisis de lo actuado, permiten razonablemente deducir que la autoridad administrativa tuvo en cuenta los parámetros señalados en orden a la prudente y proporcional graduación de la sanción, sin que los recurrentes hubieran rebatido los fundamentos en que se sustentó la determinación del *quantum* de la multa aplicada. No alcanza, a tal fin, la sola calificación de la sanción como excesiva, desproporcionada o confiscatoria, sino que debe demostrarse que, en el caso concreto, la Administración obró con exceso de punición.

Tampoco resulta suficiente invocar que en el acto sancionatorio “se adoptó el valor de las operaciones de compraventa, pese a que, en cuatro de ellas, solamente Jim Automóviles S.A. percibió una comisión muy menor en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

comparación con las sumas involucradas”, pues, conforme fuera indicado con anterioridad, las normas aplicables a los accionantes resultaban claras respecto a las consecuencias que éstos debían enfrentar en caso de incumplimientos.

A mayor abundamiento, el referido argumento tampoco puede obtener favorable acogida, toda vez que la autoridad de la U.I.F. impuso la sanción mínima por dicho incumplimiento. En efecto –conforme fue reseñado–, la norma establecía una “pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción” (cfr. inciso 1° del artículo 24 de la Ley n° 25.246), por lo que, dichos planteos deben ser desestimados.

En función de las consideraciones precedentes, y en atención a la conducta reprochada, el bien jurídico protegido y los montos –mínimo y máximo– previstos para las multas en el artículo 24, incisos 1° y 3°, de la Ley n° 25.246, en cuanto a las sanciones impuestas a la Sra. María Natalia González Gordillo y al Sr. Juan Ignacio Munafo, por un importe total de pesos siete millones ochocientos setenta y siete mil quinientos (\$7.877.500), y la sanción por igual monto impuesta a la firma Jim Automóviles S.A., teniendo en cuenta la suma de las multas impuestas por cada uno de los trece (13) incumplimientos que se tuvieron por acreditados –conforme lo reseñado *supra*, en los Considerandos I y VI, acápite *xix*)–, se advierte que las mismas respetan los límites legales y no se exhiben como manifiestamente desproporcionadas.

En tales condiciones, en tanto los recurrentes se limitaron a caracterizar las multas impuestas como excesivas y lesivas del principio de proporcionalidad, sin aportar elementos de juicio que evidencien que las sanciones hubieren sido justipreciadas con prescindencia de las circunstancias del caso, o por encima de los límites legales, o que resulten apartadas de los cánones normativos o bien fueran desproporcionadas, irrazonables arbitrarias o exorbitantes, o que excedan el disvalor de las conductas achacadas –ni advierte este Tribunal que concurran tales extremos en el *sub lite*–, debe estarse a lo resuelto por la autoridad competente. Lo cual conduce a descartar las quejas efectuadas por los encartados sobre el punto.

Por lo demás, a fin de dar acabada respuesta a las postulaciones de los apelantes, específicamente en cuanto a aquellas dirigidas a cuestionar que las multas (específicamente, las impuestas conforme lo normado por el inciso 3° del artículo 24 de la Ley n° 25.246) hayan sido fijadas en su máximo legal o



bien en un monto cercano a aquél, a más de lo dicho cabe tener especial consideración que se está frente a un supuesto en que se trata del incumplimiento de deberes formales; de modo tal que no es dable hacer la respectiva estimación numérica, sobre un objetivo valor de bienes u operaciones involucradas, todo lo cual de por sí tampoco habilita a sostener que se hubiera incurrido en un exceso de punición.

Se concluye, de tal modo, que las objeciones formuladas en torno de la cuantía de las multas, devienen improcedentes para alterar dicho aspecto de lo resuelto por la autoridad administrativa.

XVII.- Que, a modo de corolario de lo expuesto, se concluye que los desarrollos y consideraciones que anteceden conducen a desestimar el recurso interpuesto de modo conjunto por la firma Jim Automóviles S.A., la Sra. María Natalia González Gordillo y el Sr. Juan Ignacio Munafo y, en consecuencia, corresponde confirmar las Resoluciones U.I.F. nros. 03/2021 y 118/2021, en cuanto ha sido materia de agravios.

XVIII.- Que, recapitulando lo expresado hasta aquí y según el modo en que se resuelve, cabe disponer que las costas sean soportadas por los recurrentes, por no advertirse motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota contemplado en la primera parte del artículo 68 del C.P.C.C.N..

XIX.- Que, finalmente, corresponde dilucidar lo referente a los emolumentos profesionales.

Al respecto, cabe señalar que mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la labor desplegada por las profesionales que actuaron durante la sustanciación de la causa. En dicha tarea, ha de ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada una haya aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.

A fin de lograr una retribución equitativa y justa, no resulta conveniente la aplicación automática de los porcentajes previstos en la ley de arancel, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la labor desplegada. Tal proceder, limita la misión del juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa n° 5.726/2022

otros (cfr. esta Sala, *in re* “Seguridad Cono Sur SA c/ PNA – Disp. n° 36/12”, sent. del 4/06/2013 y sus citas).

Paralelamente, la C.S.J.N. ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (*Fallos*: 270:388; 296:124; entre otros).

Contempladas estas directivas, en atención a la naturaleza, resultado y monto del litigio –conf. multas impugnadas–; considerando el valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del recurso tramitado, corresponde regular los honorarios de los profesionales, por la contestación del recurso incoado, en la suma de pesos seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta (\$ 658.880), equivalentes a 14,5 UMA, para cada uno, a la Dra. Laura Julia DOMÍNGUEZ y al Dr. Tomás María MENDY, en su condición de letrados apoderados actuantes en defensa de la demandada U.I.F. (conf. arts. 16, 20, 21, 29, 44 inciso a, 51 y concordantes de la Ley n° 27.423, y fijación del valor UMA mediante la Resolución SGA de la C.S.J.N. N° 626/2024, del 4 de abril de 2024, en referencia a la Acordada C.S.J.N. n° 8/2024).

Aclárese que el pago de las sumas referidas se encuentra en un 50% a cargo de la firma Jim Automóviles S.A., y el restante 50% se halla a cargo de la Sra. María Natalia González Gordillo y del Sr. Juan Ignacio Munafo, en partes iguales (es decir, asumiendo un 25% cada uno).

El importe del Impuesto al Valor Agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios cuando los profesionales acreedores revistan la calidad de responsables inscriptos en dicho tributo (cfr. esta Sala, “Beccar Varela Emilio – Lobos Rafael Marcelo c/ Colegio Público de Abogados”, del 16/07/1996).

Para el caso de que los profesionales no hayan denunciado la calidad que invisten frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre los honorarios regulados correrá a partir de la fecha en que lo hagan.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados dentro de los diez (10) días de notificado el presente pronunciamiento (art. 54 de la Ley de Arancel).

En caso de incumplimiento, el acreedor queda facultado para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo



apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante la primera instancia del fuero.

Para ello, hágase saber a los presentantes que, en virtud de lo normado por la Ley n° 26.685, como así también en razón de lo dispuesto en el punto 2°) de la Acordada n° 6/14 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los documentos electrónicos que surgen del Sistema de Consulta de Causas del Poder Judicial de la Nación (<http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam>) tienen la misma eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales; por ende, no resulta necesaria su certificación.

Asimismo, hágase saber que la interposición y consecuente recepción del respectivo incidente deberán ser realizadas de manera electrónica ante la Secretaría General del Fuero, conforme se desprende de las precisiones que surgen de las Acordadas nros. 4/2020, 12/2020 y 31/2020, y sus respectivos Anexos, dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si vencidos los plazos mencionados los interesados no impulsan el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones se remitirán a la instancia de origen sin más trámite.

En este último supuesto, en caso de que los interesados requieran el cobro de sus honorarios en fecha posterior a la remisión de la causa al organismo de origen, deberán iniciar el correspondiente proceso de ejecución, el que tramitará por ante la primera instancia del fuero, según el mecanismo descripto precedentemente.

Por las razones expuestas, este Tribunal **RESUELVE: 1°)** Desestimar el recurso interpuesto de modo conjunto por la firma Jim Automóviles S.A., la Sra. María Natalia González Gordillo y el Sr. Juan Ignacio Munafo y, en consecuencia, confirmar las Resoluciones U.I.F. nros. 03/2021 y 118/2021, en cuanto ha sido materia de agravios; **2°)** Imponer las costas a cargo de los recurrentes vencidos (cfr. artículo 68 del C.P.C.C.N.); y **3°)** Regular honorarios conforme lo expresado en el considerando XIX.

Regístrese, notifíquese –a las partes y al Sr. Fiscal General– y, oportunamente, devuélvase.

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA II

Causa nº 5.726/2022

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

LUIS M. MÁRQUEZ

